

ENERO 28 de 1921

64.<sup>a</sup> REUNIÓN — 4.<sup>a</sup> SESIÓN EXTRAORDINARIA

PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES DON ARTURO GOYENECHE  
Y DON TEÓFILO SÁNCHEZ DE BUSTAMANTE

DIPUTADOS PRESENTES: Agüero Vera J. Zacarías, Albarracín Francisco L., Aldao Ricardo, Alemán Eugenio, Anastasi Leonidas, Andreis Fernando de, Aranda Macedonio, Arámburu Juan B., Aráoz José Luis, Arnedo Rodolfo, Avellaneda Nicolás A., Barrera Nicholson Antonio, Beiró Francisco, Bermúdez Manuel A., Berrondo Valentín, Bravo Marco, Bréard Eugenio E., Bunge Augusto, Cabrera Aníbal, Cabrera Enrique, Cafferata Juan F., Caracche Pedro, Cárcano Ramón J., Cardarelli Emilio, Carol Absalón, Carosini Alberto H., Celsia Ernesto H., Costanti Gerardo, Cortínez Domingo, Corvalán Santiago E., Correa Francisco E., Cristobo Gumersindo L., Daneri Luis M., Davel Ricardo J., Díaz de Vivar Ramón, Dickmann Enrique, Dussaut Rolén, Echagüe Alfredo, Escobar Adrián C., Fernández Daniel, Fernández Jacinto, Ferreyra Andrés (hijo), Fox Pedro A., Francioni Isaac, Frugoni Juan José, Gallardo Manuel, Gatica Teófilo L., Gibert Pedro F., Gil Matías, González Iramain Héctor, González José Antonio, González Zimmermann A., Goyeneche Arturo, Grau José M., Güerci Luis, Guido Mario M., Justo Juan B., Lagos Joaquín, Landaburu Laureano, Leguizamón Arturo, López Héctor S., López Anaut Pedro, Lozano Antonio, Maidana Julián, Martínez Enrique, Martínez José Heriberto, Massoni José S., Méndez Casariego Alberto, Míguez Edgardo J., Miñones Alejandro, Molina Víctor M., Molinas Luciano F., Moral Ernesto M. del, Moreno Julio del C., Muzio Agustín S., O'Farrell Juan A., Oliva Moisés J., O'Reilly Guillermo R., Ortiz Roberto M., Otamendi José A., Padilla Ernesto E., Paz Alberto J., Peña Manuel, Pereira Rozas Ricardo, Pérez Virasoro E., Pinedo Federico (hijo), Quiroga Marcial V., Remonda Mineraud F., Repetto Nicolás, Riú Francisco A., Rodeyro J. León, Rodríguez Carlos J., Rothe Guillermo, Saccone Romeo D., Sánchez de Bustamante T., Sánchez Sorondo M. G., Santa María Arturo, Taboada Diógenes, Tamborini José P., Tierney Juan S., Tomaso Antonio de, Tomaszewski Eduardo M., Usandivaras Agustín, Valle Delfor del, Vedia Mariano de, Vergara Valentín, Yolde Lauro; AUSENTES CON LICENCIA: Aesta Enrique, Arana Eduardo, Aráoz Miguel A., Astrada Manuel A., Bas Arturo M., Casás José O., Costa Julio A., Gallegos Moyano C., Garat Damián P., Lencinas Carlos Washington, Núñez Pedro R., Quellet Emilio, Quinteros Eduardo F., Rubilar Francisco Vera Octaviano S., Villafañe Benjamín; AUSENTES CON AVISO: Avellaneda Marco A., Bary Alberto de, Capurro Juan J., Santamarina Antonio; AUSENTES SIN AVISO: Anello Arturo, Beguistain Manuel B., Ceballos Mariano P., Demaria Mariano (hijo), Ferrarotti Juan L., Hernández Sabá Z., Isnardi Arturo, Laurencena Miguel M., Lehmann Guillermo, Martínez Benigno, Montes José A., Mora y Araujo Manuel, Mouesca Eduardo, Noriega José Víctor, Oyhanarte Raúl F., Parodi Silvio E., Pintos Angel, Pradère Carlos M., Raffo de la Reta J. C., Robín Castro Napoleón, Rodríguez Calixto A., Rodríguez Jorge R., Rougés León, Solanet Pedro; AUSENTES EN COMISIÓN: Martínez José M., Olmos José T., Parry Roberto, Quirós Herminio J.

SUMARIO

- 1.—Manifestaciones en minoría.
- 2.—Aprobación del acta de la sesión anterior.
- 3.—Asuntos entrados:

I—Comunicaciones del honorable senado y peticiones particulares.

II—Proyecto de ley de los señores diputados Gallardo y Corvalán, por el que se destina una suma de dinero a socorrer las víctimas de las inundaciones del río Dulce, en Santiago del Estero.

III—Proyecto de ley del señor diputa-

do Gallardo por el que se acuerda una contribución nacional para la construcción de las obras de defensa del río Dulce, en Santiago del Estero.

- 4.—Licencias para faltar a sesiones concedidas a los señores diputados Gallegos Moyano y Quellet.
- 5.—Pregunta del señor diputado Cafferata respecto del despacho del proyecto de ley que destina el producido de la lotería a obras de asistencia social.
- 6.—Proyecto de resolución de los señores diputados Tierney y Cortínez sobre nombramiento de una comisión investigadora de la situación de la provin-

cia de San Juan. Moción rechazada de tratarlo sobre tablas. Moción aprobada, del señor diputado Quiroga, para que la comisión de negocios constitucionales se expida sobre dicho proyecto en cuarto intermedio.

- 7.—Consideración de las modificaciones introducidas por el honorable senado en el proyecto de ley sobre jubilación de empleados pertenecientes a empresas que prestan servicios públicos.
  - 8.—Moción del señor diputado Sánchez Sorondo de suspender momentáneamente la consideración del asunto en debate para tratar el despacho de la comisión de negocios constitucionales sobre el proyecto a que se refiere el número 6. La honorable cámara resuelve mantener el quórum en la casa hasta la hora 20.
  - 9.—Continúa la consideración del asunto registrado bajo el número 7: jubilación de empleados pertenecientes a empresas que prestan servicios públicos.
  - 10.—Moción, aprobada, del señor diputado Quiroga para que la honorable cámara se constituya en sesión permanente hasta terminar la consideración del asunto en debate y el relativo a la comisión investigadora en la provincia de San Juan.
  - 11.—Termina la consideración del asunto registrado bajo los números 7 y 9: jubilación de empleados pertenecientes a empresas que prestan servicios públicos.
  - 12.—Consideración y aprobación del despacho de la comisión de negocios constitucionales en el proyecto de resolución de los señores diputados Tierney y Cortínez sobre nombramiento de una comisión investigadora de la situación constitucional de la provincia de San Juan. Designación de la comisión de negocios constitucionales al efecto.
- En Buenos Aires, a 28 de enero de 1921, siendo las 15 y 40 ocupan sus asientos en el recinto los señores diputados en quórum legal.

## 1

## APERTURA DE LA SESION

—Mientras se llama al recinto a los señores diputados para formar quórum:

**Sr. de Andreis.** — ¿Quiere informarme el señor presidente cuántos diputados hay en el recinto?

**Sr. Presidente** (Goyeneche). — 55 señores diputados; en la casa hay 90.

**Sr. de Andreis.** — Hago moción de levantar la sesión por haber pasado la hora.

**Sr. Presidente** (Goyeneche). — En la casa hay 90 señores diputados.

**Sr. de Andreis.** — Pero no en el recinto.

**Sr. Presidente** (Goyeneche). — Están reunidas dos comisiones y se ha mandado avisar a los señores diputados.

**Sr. Rodeyro.** — Podríamos esperar.

**Sr. Frugoni.** — Hago moción para que esperemos. Es el momento de hacer sonar la campana de alarma para que los señores diputados entren a trabajar a este solemne recinto.

—Obtenido quórum, momentos después:

**Sr. Presidente** (Goyeneche). — Queda abierta la sesión con asistencia de 85 señores diputados.

## 2

## ACTA

**Sr. Presidente** (Goyeneche). — Se va a dar lectura del acta de la sesión anterior.

**Sr. Arnedo.** — Hago moción de que se suprima la lectura.

—Habiendo asentimiento, se suprime la lectura del acta y se da ésta por aprobada.

## 3

## ASUNTOS ENTRADOS

**Sr. Presidente** (Goyeneche). — Se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

los miembros de la comisión de negocios constitucionales y de que nos declaremos en sesión permanente hasta la terminación de los asuntos de los tranviarios y el propuesto por el señor diputado por San Juan?

**Varios señores diputados.** — Que se vote por partes.

**Sr. Presidente** (Goyeneche) — Se va a votar si los miembros de la comisión de negocios constitucionales se deben esperar en la sesión de hoy, en un cuarto intermedio, respecto del asunto sometido a su consideración.

—Se vota y resulta afirmativa.

**Sr. Presidente** (Goyeneche) — Se va a votar la segunda parte...

**Sr. Molina.** — Me permito formular una pequeña modificación: que en lugar de constituirse en sesión permanente, se resuelva tratar el despacho inmeditamente después del asunto de los tranviarios, es decir, en la sesión de hoy los dos asuntos.

**Sr. Rodeyro.** — Acepto la modificación.

**Sr. Presidente** (Goyeneche) — Se va a votar la segunda parte de la moción con ese alcance.

—Resulta afirmativa.

## 7

### JUBILACION DEL PERSONAL DE EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

**Sr. Presidente** (Goyeneche). — Se pasará a la orden del día.

En consideración el despacho de la comisión de legislación del trabajo sobre jubilación de empleados y obreros de empresas particulares, que prestan servicios públicos.

*Honorable cámara:*

Vuestra comisión de legislación del trabajo ha estudiado el proyecto de ley pasado en revisión por el honorable senado, referente a jubilaciones, pensiones y subsidios al personal permanente de empresas particulares que

prestan servicios públicos; y por las razones que aducirá el miembro informante, os aconseja le prestéis vuestra aprobación.

Sala de la comisión, enero 28 de 1921.

*C. J. Rodríguez. — Alejandro Miño-  
ñes. — Pedro López Anaut. —  
Adrián C. Escobar. — Eduardo  
Padilla.*

#### PROYECTO DE LEY

*El senado y cámara de diputados, etc.*

#### CAPITULO I

*Objeto y beneficiarios de la ley*

Artículo 1.º — Créase la caja nacional de jubilaciones, pensiones y subsidios para el personal permanente de las empresas particulares de tranvías, teléfonos, telégrafos, gas, electricidad y radiotelegrafía, constituidas en virtud de autorización del gobierno nacional o de la municipalidad de la capital federal, aún cuando éstas, por su naturaleza, se extiendan más allá del perímetro del municipio.

El personal permanente de agencias o dependencias de esas mismas empresas, aunque no realice por el momento servicio en común con ellas, queda comprendido en las disposiciones de esta ley cualquiera sea el lugar de su funcionamiento en la nación.

Art. 2.º — Podrán acogerse a los beneficios y obligaciones de la presente ley los empleados y obreros de las empresas de jurisdicción provincial idénticas a las que se refiere el artículo 1.º, más las de aguas corrientes y servicios sanitarios, cuyos representantes lo solicitaren con intervención de los respectivos gobiernos, siempre que las empresas, los empleados y obreros y dichos gobiernos hagan los aportes y se sujeten a las condiciones fijadas en esta ley; pero ninguno de los beneficios concedidos por ella le serán acordados sino después de haber transecurrido tres años desde la fecha de haberse acogido a la presente ley.

Art. 3.º — Las disposiciones de esta ley comprenden a todos los empleados y obreros permanentes de las empresas a que se refieren los artículos anteriores, a los que perteneciendo al personal permanente de las mismas hubieran sido destituidos después del 25 de septiembre de 1918 por causas que no sean

las enumeradas en el artículo 28, a los médicos y empleados de las sociedades de socorro reconocidas y dependientes de las empresas, a los de la caja que esta ley organiza y a las personas a quienes se refiere el artículo 32 con relación a los empleados y obreros permanentes que hubiesen fallecido con posterioridad a la misma fecha.

Se considera empleados u obreros permanentes a los efectos de esta ley, además de aquellos cuya ocupación tenga dicho carácter, a los que tuvieren más de seis meses de servicios continuos en una empresa.

No están comprendidos en las disposiciones de esta ley los empleados y obreros que desempeñen servicios accidentales o de carácter transitorio.

Art. 4.º — A los efectos de la presente ley, queda reconocida la antigüedad de cada empleado y obrero desde el día en que empezó a prestar servicio en cualquiera de las empresas comprendidas en ella.

A los que hayan trabajado en compañías actualmente fusionadas o adquiridas por alguna de las actuales o de sus antecesoras, se les acuerda la antigüedad desde el día en que empezaron a prestar servicios en la primitiva empresa.

Art. 5.º — En el cómputo de años de servicios sólo se tomarán en cuenta los servicios efectivos, aunque fuesen discontinuos, de los empleados y obreros, sea cual fuere la forma en que perciban sus haberes y prestados en cualquiera de las empresas a que se refiere el artículo 1.º de esta ley o en aquellas que se acojan a sus disposiciones de acuerdo con el artículo 2.º, como asimismo los servicios prestados por dichos empleados u obreros en las dependencias del gobierno nacional, municipalidad de la capital federal o empresas ferroviarias, como lo establece el artículo 54, no pudiendo computarse sino los de una empresa cuando simultáneamente el empleado u obrero hubiera prestado servicios en alguna de las otras.

La fracción que en el término total de antigüedad exceda de seis meses, será computada por un año entero.

## CAPITULO II

### *Fondos de la caja*

Art. 6.º — El capital de la caja se formará desde la fecha de la promulgación de esta ley:

- a) Con el importe del descuento forzoso del 5 por ciento de los sueldos de las personas comprendidas en el artículo 3.º, siempre que no excedan de mil pesos mensuales, en cuyo caso el descuento se hará solamente sobre esta última cantidad.
- b) Con el importe de un mes de sueldo pagadero en 36 mensualidades continuas de cada uno de los actuales empleados y obreros permanentes.
- c) Con el importe del primer mes de sueldo de cada empleado u obrero que llegue a ser permanente, el que se abonará en 36 mensualidades.
- d) Con la diferencia del primer mes de sueldo, cuando el empleado u obrero pase a ocupar un empleo mejor rentado o perciba un aumento de sueldo.
- e) Con los recursos provenientes del artículo 51.
- f) Con una contribución mensual de las empresas, igual al 8 por ciento de los sueldos y jornales de todos los empleados y obreros permanentes, siempre que el sueldo no exceda de mil pesos mensuales en cuyo caso la contribución se pagará solamente sobre esta última cantidad.
- g) Con el importe de los fondos, más sus intereses, que con anterioridad a la promulgación de la presente ley han debido contribuir las empresas para la jubilación de su personal, de acuerdo con lo que hubiesen estado obligadas por sus contratos de concesión y por las ordenanzas municipales o leyes nacionales o provinciales.
- h) Con el importe de las multas en que incurrieran las empresas, que no tengan otro destino por ley o por contrato.
- i) Con los intereses y beneficios procedentes de la colocación de los fondos de la caja.
- j) Con las donaciones y legados que se le hagan.
- k) Con el aporte de la Nación cuyo monto y forma se determinará una vez verificado el censo a que se refiere el artículo 59 y en presencia del informe de la caja que el mismo artículo establece.

Art. 7.º — Los fondos y las rentas que se obtengan de esta ley serán de exclusiva pro-

piedad de las personas comprendidas en sus disposiciones, y con ellos se atenderá el pago de las jubilaciones, pensiones, retiros y subsidios que se acuerden en lo sucesivo, de conformidad con la misma y los gastos que origine la administración de la caja.

En ningún caso podrá disponerse de ellos para otros fines, bajo la responsabilidad personal de los miembros del directorio, que se hará extensiva judicialmente a sus bienes.

Art. 8.º — Todos los fondos de la caja serán depositados en cuenta especial en el Banco de la Nación Argentina, salvo las sumas que fije el directorio como indispensables para los pagos corrientes.

Art. 9.º — Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, los fondos de la caja, descontadas las sumas indispensables para los pagos corrientes, serán invertidos previa resolución del directorio en cada caso, de manera que produzcan el mayor interés y la más frecuente capitalización, en título de la renta nacional, o que tengan la garantía subsidiaria de la nación.

Hasta el 50 por ciento de los fondos capitalizados cuando el directorio crea oportuno podrá ser invertido en préstamos a los empleados u obreros comprendidos en esta ley, que tuvieran más de 10 años de servicios, con garantía de primera hipoteca, y con destino exclusivo a la construcción o adquisición de casas para habitación de sus propietarios hasta la suma de 10.000 pesos y en proporción al sueldo del empleado u obrero, debiendo ser dicho sueldo, por lo menos equivalente, al triple de la cuota que se debe satisfacer mensualmente por concepto de amortización e intereses. Estos préstamos gozarán de un interés no mayor del 7 por ciento y se pagarán por amortizaciones acumulativas en un plazo que no exceda de 15 años, pudiendo anticiparse en cualquier momento su cancelación parcial o total de acuerdo con las tablas que al efecto fije la reglamentación de esta ley. Dichos préstamos podrán ser combinados con un seguro ordinario de vida. Podrá acordarse también préstamos de dinero a los empleados u obreros con más de cinco años de servicios, hasta una suma no mayor del importe correspondiente a tres meses del sueldo que goce el empleado u obrero, amortizables en doce mensualidades, siempre que responda a ellos el fondo acumulado de sus aportes personales. Todos los derechos emergentes de esta ley

quedan afectados al cumplimiento de las obligaciones que el empleado u obrero haya contraído en virtud de este artículo.

Art. 10. — Las empresas a que se refiere la presente ley están obligadas a practicar los descuentos a que se refieren los incisos a), b) y c) del artículo 6.º en los sueldos del personal permanente de sus respectivas dependencias, y depositarlos mensualmente en dinero efectivo en el Banco de la Nación Argentina, a la orden de la caja, dentro de los treinta días siguientes de cada mes vencido, sin deducir cantidad alguna, por ningún concepto.

Art. 11. — Las sumas con que deben contribuir las empresas de acuerdo con el inciso f) de artículo 6.º de la presente ley, deberán ser depositadas en el tiempo y forma que para el depósito de los descuentos establece el artículo 10.

Las sumas a que se refiere el inciso g) del artículo 6.º, deberán ser depositadas por las empresas en la misma forma, dentro de los treinta días de promulgada la presente ley.

Art. 12. — Las empresas que no cumplieran con las disposiciones de los artículos precedentes incurrirán en una multa de doscientos pesos diarios, después de la intimidación que, al efecto de ese cumplimiento, debe hacerles el presidente del directorio de la caja, quien tendrá personería para promover ante el poder ejecutivo o ante los tribunales de justicia, las acciones ejecutivas pertinentes.

### CAPITULO III

#### *De las jubilaciones*

Art. 13. — La jubilación que acuerda esta ley es:

- 1.º Ordinaria.
- 2.º Por retiro voluntario.
- 3.º Por invalidez.

Art. 14. — La jubilación ordinaria se acordará a los empleados u obreros en las condiciones siguientes:

- 1.º Integra:

Al empleado u obrero que habiendo prestado 30 años de servicios como mínimo, haya cumplido 50 años de edad.

- 2.º Reducida en un 5 por ciento por cada año de edad que le falte para los 50, al empleado u obrero que, habiendo prestado 30 años de servicios como mí-

nimo, tenga 45 años de edad y solicite jubilarse.

Art. 15. — El monto de la jubilación ordinaria se calculará con relación al promedio de los sueldos percibidos durante los cinco últimos años de servicios y con sujeción a la siguiente escala:

- 1.º Hasta cien pesos moneda nacional de sueldo, noventa y cinco por ciento.
- 2.º Sueldos entre cien y trescientos pesos moneda nacional, noventa y cinco pesos más el ochenta por ciento de la diferencia entre cien y trescientos pesos moneda nacional.
- 3.º Sueldos entre trescientos y mil pesos moneda nacional, doscientos cincuenta y cinco pesos más el setenta por ciento de la diferencia entre trescientos y mil pesos moneda nacional.

Art. 16. — Corresponde la jubilación por retiro voluntario al empleado u obrero que teniendo más de diez años de servicios y cincuenta de edad no alcance al número de años de servicios exigidos por el artículo 14.

Esta jubilación se calculará a razón de dos por ciento de la jubilación ordinaria, por cada año de servicios.

Art. 17. — Los empleados u obreros que teniendo menos de diez años de servicios alcancen los 50 años de edad y deseen retirarse, tendrán derecho a una indemnización igual a las sumas aportadas por ellos al fondo de la caja, más los intereses a razón del 5 o/o anual capitalizados por año. En ningún caso se calcularán esos intereses con posterioridad a la fecha del retiro.

Art. 18. — A los empleados u obreros que fuesen declarados cesantes por no requerirse sus servicios o por razones de economía o que fuesen destituidos por causas distintas a las que se refiere el artículo 28 y a las que por contraer matrimonio se vieren obligadas por los reglamentos de las empresas a dejar el trabajo siempre que por esta ley no tuvieran derecho a un beneficio mayor, se les acordará:

- 1.º El 5 o/o de las sumas que hubiesen percibido en concepto de sueldos o remuneración de su trabajo, más los intereses a razón del 5 o/o anual, capitalizados anualmente, a los que tuvieren menos de diez años de servicios.
- 2.º Un mes de sueldo por cada año de servicios a los que tuvieren diez años o más de servicios y menos de veinte.
- 3.º Una jubilación equivalente al 2 o/o de

la jubilación ordinaria por cada año al que tuviere más de veinte años de servicios.

Art. 19. — Los empleados u obreros comprendidos en el artículo anterior que reingresaren posteriormente al servicio de las empresas, tendrán derecho a efectos de esta ley, a que se les compute los años de servicios prestados antes de su cesantía, siempre que hubieran renunciado a los beneficios de dicho artículo o que restituyan a la caja en una sola vez, las sumas que hubieren percibido de la misma por razón de su cesantía.

Art. 20. — El monto de la jubilación por invalidez se calculará en razón de un 5 por ciento del monto de la jubilación ordinaria por cada año de servicios hasta su máximo.

Art. 21. — Corresponde la jubilación por invalidez dentro de las condiciones establecidas en el artículo anterior:

- 1.º Al empleado u obrero que después de diez años de servicios fuese declarado física e intelectualmente imposibilitado para continuar en el ejercicio de su empleo o de otro compatible con su actividad habitual o su preparación comprobada.
- 2.º Al empleado u obrero que, cualquiera que fuese el tiempo de servicios prestados se incapacite en cualquier forma permanente en un acto de servicio y por causa evidente y exclusivamente imputable al mismo servicio.

Art. 22. — En ningún caso se podrá acordar jubilación por invalidez a quien inicie las gestiones después de seis meses de haber dejado de formar parte del personal de las empresas, salvo el caso de fuerza mayor, incapacidad o imposibilidad para gestionarla.

Art. 23. — Las jubilaciones por invalidez se acordarán con carácter provisorio, y los beneficiarios quedarán sujetos a las revisiones que en número de dos anuales, como máximo, imponga el directorio de la caja dentro de los cinco años posteriores a su otorgamiento, a partir de cuya fecha se considerarán definitiva.

Art. 24. — No se podrá acordar jubilación por invalidez sin previo informe del departamento nacional de higiene o del médico o médicos designados al efecto por el directorio, respecto a las causales de imposibilidad físicas e intelectuales alegadas. Sin perjuicio de esto, el directorio ordenará todas las averiguaciones que estime convenientes.

Art. 25. — Unicamente los que hayan obtenido jubilación ordinaria podrán volver al servicio. En este caso el jubilado cesará en el goce de la jubilación, y percibirá solamente el sueldo asignado al nuevo empleo. Abandonado éste, volverá al goce de la jubilación, sin que pueda interponer reclamo alguno para que le sea aumentada, por cuya causa no se le exigirán los aportes establecidos en el artículo 6.º, con relación al nuevo empleo.

Art. 26. — Exceptuase de lo dispuesto en el artículo anterior al jubilado por invalidez cuyos servicios fuesen utilizados en otro empleo; en este caso percibirá, además del sueldo, la fracción de la jubilación por invalidez que le acuerde el directorio de la caja proporcionalmente a la disminución sufrida en su capacidad de trabajo.

Si alcanzase los años de servicios para obtener jubilación ordinaria, le será acordada jubilación definitiva igual al monto de la jubilación ordinaria, que corresponda al sueldo de su nuevo empleo, más la fracción de la jubilación por invalidez que haya percibido.

Art. 27. — Las jubilaciones, retiros y subsidios una vez concedidos serán pagados desde el día en que el interesado deje el servicio y a los que ya lo hubieran dejado, desde el día en que se les acuerde la jubilación. En los casos de invalidez o cuando el empleado u obrero fuera declarado cesante o destituido por causas no previstas en esta ley, la jubilación o el subsidio serán abonados desde el día en que el empleado u obrero por razón de su invalidez o de su cesantía se vió privado de su empleo, a cuyo efecto es requisito indispensable, para su constatación, la comunicación inmediata del hecho al directorio de la caja salvo el caso de que por imposibilidad o fuerza mayor no pudiera comunicarse.

Si el empleado u obrero que se hallare en estas condiciones falleciere sin haber percibido el importe de la jubilación que le hubiere correspondido desde el día que por su invalidez o cesantía se vió obligado a dejar su empleo, dicho importe será entregado a las personas mencionadas en el artículo 32, sin perjuicio del derecho a percibir la pensión que corresponda por esta ley.

Art. 28. — Los empleados u obreros que no tuvieran familia que sostener, que hubieren llenado las condiciones exigidas para tener derecho a ser jubilados, y que antes de

serlo fueran destituidos por mal desempeño de los deberes de su cargo o por abuso de bebidas alcohólicas durante el ejercicio del mismo o condenados por sentencia judicial por delito que haya merecido pena de presidio o de penitenciaría, no serán jubilados, pero se les devolverá el importe de los descuentos hechos a sus sueldos siempre que no hubiere lugar a aplicarlo a la indemnización del daño civil causado.

En caso de tener familia que sostener, no se devolverá al penado el importe del descuento hecho a sus sueldos, pero gozarán de la pensión que corresponda a la jubilación perdida, las personas que tengan derecho a ello con arreglo a esta ley.

Art. 29. — El derecho para pedir la jubilación se extingue a los cinco años a contar desde el día en que se dejó el servicio, salvo caso de demencia, incapacidad o fuerza mayor, y mientras esas circunstancias subsistan.

Art. 30. — La jubilación es vitalicia y el derecho a percibirla solo se pierde por las causas expresadas en esta ley. El jubilado perderá todo derecho a la jubilación si se domicilia en el extranjero, sin obtener previamente permiso del poder ejecutivo nacional.

Art. 31. — La conmutación o el indulto no harán renacer los derechos perdidos como consecuencia de lo dispuesto por esta ley.

## CAPITULO IV

### *De las pensiones*

Art. 32. — En los mismos casos en que con arreglo a esta ley haya derecho a gozar de la jubilación y ocurra el fallecimiento del empleado u obrero, tendrán derecho a percibir la pensión en la proporción y condiciones establecidas en este capítulo: la viuda, el viudo inválido, los hijos y en su defecto los padres y a falta de éstos las hermanas solteras del causante que hubiesen estado a cargo de éste.

Si el fallecido hubiese sido ya jubilado, las personas enumeradas en el párrafo anterior tendrán derecho a pensión en las condiciones establecidas en los artículos siguientes, sin más trámite que el de justificar su personería, acreditar la existencia de la jubilación de conformidad a esta ley y observar los requisitos establecidos.

Art. 33. — El derecho a gozar de la pen-

sión entre las personas mencionadas en el artículo anterior corresponderá desde el día del fallecimiento del causante y se otorgará en la forma y orden siguiente:

- 1.º A la viuda y al viudo incapacitado para el trabajo en concurrencia con los hijos.
- 2.º A los hijos solamente.
- 3.º A la viuda en concurrencia con los padres del causante, siempre que éstos estuviesen exclusivamente a cargo de aquél.
- 4.º A los padres que se encuentren en las condiciones del inciso anterior.
- 5.º A las hermanas solteras del causante que se encuentren en las condiciones de los padres.

Los hijos naturales reconocidos o declarados tales por sentencia judicial, gozarán de la parte de pensión a que tengan derecho con arreglo a la legislación civil.

Art. 34. — El importe de la pensión será equivalente al 50 o/o del total de la jubilación que percibía o a que tenía derecho el causante. La mitad de la pensión corresponde a la viuda, si concurren los hijos o los padres del causante; la otra mitad se distribuirá entre éstos "per capita". A falta de padres, hijos o hermanas, la totalidad de la pensión corresponderá a la viuda.

En los casos de los incisos 1.º y 2.º del artículo 33, si se extingue el derecho a la pensión de algunas de las personas enumeradas en ellos, la parte correspondiente acrecerá a los hijos comprendidos en los beneficios de esta ley.

Art. 35. — Si la esposa del empleado quedase viuda hallándose divorciada por su culpa o hubiese estado separada de hecho sin voluntad de unirse, no tendrá derecho a pensión, y ésta pasará a las personas que con arreglo a esta ley tengan derecho a ella.

Art. 36. — Si a la muerte del causante de una pensión, quedaran huérfanos de distintos matrimonios, la pensión se distribuirá en la proporción que corresponda a los mismos y será entregada a sus respectivos representantes legales.

Art. 37. — Las pensiones son vitalicias y el derecho a percibir las sólo se pierde en los casos establecidos por esta ley.

Art. 38. — No se acumularán dos o más pensiones o jubilaciones a la misma persona. Al interesado le corresponde optar por la que le

convenga, y hecha la opción, quedará extinguido el derecho a las otras.

Art. 39. — Las pensiones serán acordadas por el directorio de la caja ante el cual deberán solicitarse, acompañando los recaudos necesarios para justificar que el postulante está en las condiciones de esta ley. El directorio acordará o desechará en definitiva la solicitud, pero sus resoluciones podrán ser apeladas en las forma y a los efectos establecidos en el artículo 62.

Art. 40. — Las personas enumeradas en el artículo 32 tendrán derecho a una indemnización igual al 5 o/o de las sumas, percibidas en concepto de sueldos por el empleado u obrero fallecido que no deje derecho a pensión. Pero si el empleado u obrero tuviere 20 años o más de servicios y falleciere sin haber adquirido el derecho a la jubilación ordinaria, las personas enumeradas en el artículo 32 tendrán derecho a percibir la pensión en la proporción de uno por ciento de la jubilación ordinaria por cada año de servicios.

Art. 41. — El derecho a pensión se extingue:

- 1.º Para la viuda, viudo o madre cuando contrajere nuevas nupcias.
- 2.º Para los hijos que no estuvieren imposibilitados para el trabajo desde que llegasen a los 18 años.
- 3.º Para las hijas o hermanas solteras desde que contraigan matrimonio.
- 4.º En general por vida deshonesta, vagancia o por domiciliarse en el extranjero sin permiso previo del poder ejecutivo nacional.

## CAPITULO V

### *Administración de la caja*

Art. 42. — La administración de la caja estará a cargo de un directorio formado por un presidente designado por el poder ejecutivo nacional, con acuerdo del senado, quien durará cuatro años en sus funciones, y un representante de las empresas y otro de los empleados y obreros de cada uno de los servicios públicos comprendidos en esta ley. Los directores durarán también cuatro años en sus funciones y se renovarán por mitades cada dos años.

En ningún caso podrán formar parte del directorio más de un representante de las



empresas y otro de los empleados y obreros de un mismo servicio público, debiendo pertenecer ambos representantes a diferentes empresas de dicho servicio público, salvo el caso de que este estuviera atendido por una sola empresa.

A los efectos de este artículo, se declaran servicios públicos distintos uno de otro, los de los tranvías, teléfonos, telégrafos y radiotelegrafía, gas y electricidad, aguas corrientes y servicios sanitarios.

Art. 43. — Para la elección de sus representantes, cada una de las empresas dispondrá de un número de votos proporcional al total de sueldos y salarios abonados en el año inmediato anterior.

Los representantes de los empleados y obreros serán designados con voto secreto por una asamblea de delegados, los cuales serán electos sin intervención de las empresas, en comicios con votación secreta por los empleados y obreros permanentes, a razón de un delegado por cada 500 empleados y obreros o fracción no menor de 200.

Simultáneamente a la elección de directores titulares, se elegirá, en la misma forma, un representante suplente para cada titular, quien entrará a formar parte del directorio en reemplazo del titular, por renuncia, fallecimiento o cualquiera otra causa que determine una ausencia de éste mayor de tres meses.

El poder ejecutivo nacional reglamentará los trámites electorales y del escrutinio de acuerdo con estas bases, y presidirá la primera elección por intermedio del Departamento nacional del trabajo y la Inspección de justicia, estando la dirección de las siguientes a cargo de la caja, con la intervención de la Inspección de justicia.

Art. 44. — El directorio nombrará y removerá a los empleados de la caja, dictará el reglamento general de ésta, levantará el padrón de empleados y obreros, expresando el sueldo, categoría, años de servicios y demás datos necesarios a los fines de la presente ley.

Dispondrá de la percepción e inversión de los fondos de la caja, fiscalizando a las empresas en lo pertinente, y anualmente fijará su presupuesto de gastos, y el monto de las jubilaciones y pensiones que deberán ser satisfechas durante el año con los fondos de

la caja, los que se someterán a la aprobación del poder ejecutivo nacional.

Art. 45. — El presidente tendrá voz y voto en las deliberaciones del directorio prevaleciendo su voto en caso de empate. Es el ejecutor de las resoluciones del directorio y su representante legal. Los empleados de la caja estarán bajo sus inmediatas órdenes, pero su nombramiento y remoción corresponderá al directorio.

Art. 46. — En ausencia del presidente de esa caja, el directorio será presidido por el de la Caja de jubilaciones y pensiones ferroviarias.

## CAPITULO VI

### *Disposiciones generales*

Art. 47. — Cuando alguna de las empresas comprendidas en esta ley pase a ser propiedad del estado o de la municipalidad, de acuerdo con las respectivas concesiones o por convenios ulteriores, el régimen de esta caja quedará subsistente para sus respectivos empleados y obreros.

Art. 48. — El monto de la jubilación, retiro, pensión o subsidio que se acuerde en virtud de esta ley no excederá de lo que corresponda a un sueldo máximo de un mil pesos moneda nacional por mes, aunque el beneficiario goce de mayor retribución.

Art. 49. — Ninguno de los beneficios concedidos por esta ley se acordará a los empleados y obreros actualmente en condiciones de obtenerlos, sino después de haber transcurrido tres años de su promulgación.

Art. 50. — Las empresas estarán obligadas a suministrar al directorio de la caja todas las informaciones que solicite sobre el personal y a permitir las comprobaciones que juzgue pertinentes, bajo aperebimiento y pena de multa variable entre 500 y 2.000 pesos.

Art. 51. — Los actuales empleados y obreros que por haber prestado servicios con anterioridad a la fecha en que se ordenó el descuento forzoso a que se refiere el inciso a) del artículo 6.º de esta ley, o por cualquier otro motivo no hayan contribuido a la formación del fondo de la caja con el 5 por ciento de todos los sueldos percibidos durante el número de años acreditados para acogerse a sus beneficios, sufrirán a su opción un descuento adicional de 3 por ciento en

sus sueldos a partir del tercer año de promulgada esta ley o un descuento de 10 por ciento en sus jubilaciones, hasta reintegrar al fondo de la caja una suma igual al 5 por ciento de los sueldos correspondientes a los años requeridos para la jubilación sobre los cuales no se les hizo el descuento forzoso del 5 por ciento. Si en la fecha en que por esta ley tenga derecho a acogerse al beneficio de la jubilación ordinaria por tener la edad y los años de servicios requeridos, el empleado u obrero continuará trabajando en el desempeño de su puesto sin acogerse a la jubilación, se le acreditará mensualmente el importe que le hubiera correspondido percibir por jubilación hasta reintegrar a la caja el importe total de lo que aun adeudase por el concepto a que se refiere este artículo.

Si falleciere el empleado u obrero sin haber reintegrada a la caja la suma adeudada por dicho concepto, se continuará haciendo el descuento del 10 por ciento sobre el monto de la pensión a que tenga derecho su familia.

Al efecto de lo establecido en este artículo, el directorio de la caja formulará en cada caso el cargo de lo que adeuda por dicho concepto cada empleado u obrero.

Art. 52. — Los empleados y obreros que con anterioridad a la vigencia de esta ley y a partir del 25 de septiembre de 1918 hubiesen sido destituidos por causas no previstas en esta ley, tendrán derecho a los beneficios que ella acuerda, con un 10 por ciento de descuento.

En las mismas condiciones podrán obtener pensión las personas a que se refiere el artículo 32, cuando los causantes hubiesen fallecido con posterioridad al 25 de septiembre de 1918 y antes de la promulgación de esta ley.

Art. 53. — Los empleados y obreros ya jubilados o pensionados por las empresas, tendrán derecho a acogerse a las disposiciones de esta ley, en las mismas condiciones que los empleados y obreros en actividad. Pero a los efectos de la contribución que establece el artículo 6.º, como asimismo en cuanto al monto de la jubilación o demás beneficios que correspondan, se calcularán sobre el término medio de los sueldos o jornales percibidos durante los últimos cinco años anteriores a su retiro.

Art. 54. — A los efectos de la jubilación

de los empleados y obreros del estado, de la municipalidad de la capital federal o de las empresas ferroviarias, la caja nacional de jubilaciones y pensiones civiles, la caja municipal de jubilaciones, retiros y subsidios de la capital federal y la caja nacional de jubilaciones y pensiones de empleados y obreros ferroviarios, computarán, respectivamente, los servicios que dichos empleados y obreros hayan prestado en las empresas de servicios públicos sujetas a las disposiciones de esta ley.

A los actuales empleados y obreros de las empresas de servicios públicos comprendidas en esta ley, se les computarán también los servicios prestados con anterioridad en las distintas ramas de la administración nacional o de la municipalidad de la capital federal y en las dependencias de las empresas ferroviarias.

En uno y otro caso, el cómputo se hará sin bonificación de tiempo.

Art. 55. — En los casos del artículo anterior esta caja transferirá o reclamará, respectivamente, a la caja nacional de jubilaciones o pensiones civiles o a la caja municipal de jubilaciones, retiros y subsidios de la capital federal o a la caja nacional de jubilaciones y pensiones de empleados y obreros ferroviarios, las sumas que proporcionalmente correspondan en cada caso.

Art. 56. — Las jubilaciones y pensiones son embargables e inalienables. Será nula toda venta, cesión o constitución de derechos que recaigan sobre ellas y que impida su libre disposición por el titular de la misma.

Art. 57. — El directorio de la caja reglamentará esta ley y someterá la reglamentación a la aprobación del poder ejecutivo nacional.

Art. 58. — A los efectos de la contribución de las empresas, quedan éstas facultadas para aumentar sus tarifas en la proporción necesaria a satisfacer el aporte que respectivamente les corresponda, previa aprobación de la autoridad que otorgó la concesión o a quien compete ejercer el contralor de las tarifas.

Art. 59. — La caja formulará un censo de los empleados y obreros comprendidos en la presente ley, como asimismo de las personas a que se refiere el artículo 32, a cuyo efecto deberá llevar un registro permanente que contenga todos los datos referentes a los em-

pleados y obreros y sus respectivas familias.

La caja, dentro de los tres primeros años de su funcionamiento, deberá hacer un estudio matemático sobre las bases de la técnica actuarial, cuyo resultado se elevará al poder ejecutivo, proponiendo las modificaciones a esta ley, que creyere convenientes, y en los años sucesivos presentará al poder ejecutivo un informe anual que haga conocer la situación financiera y administrativa actual y futura de la caja, cuyo informe deberá ser publicado en el Boletín Oficial y en dos diarios de la mayor circulación.

A los efectos de los beneficios que acuerda esta ley y del censo a que se refiere este artículo, todos los empleados u obreros comprendidos en la presente ley están obligados a suministrar los datos correspondientes a las personas mencionadas en el artículo 32, como asimismo a hacer la declaración de nacimiento o defunción de las mismas personas dentro de los 30 días de producido el caso.

Art. 60. — La caja mandará practicar una clasificación del personal de los diferentes servicios públicos en relación a la naturaleza de sus funciones o trabajos, para determinar las condiciones de preferencia o excepción que por razón de edad o sexo o de años de trabajo, correspondiera establecer y elevará sus resultados, con el dictamen correspondiente, al honorable congreso, por intermedio del poder ejecutivo, dentro del término de dos años.

Art. 61. — Los empleados y obreros que por pertenecer a empresas que tienen agencias o sucursales fuera de la república, fueren cambiados de destino, siendo trasladados a servir en otros países, tendrán derecho a la devolución de sus aportes, con el 5 por ciento de interés. Si volvieran a la república podrán reintegrarse al goce de todos los derechos que acuerda esta ley, restituyendo las sumas retiradas, con más el mismo interés del cinco por ciento, y cumpliendo las otras obligaciones que ella impone.

Art. 62. — Las jubilaciones, retiros, pensiones y subsidios serán acordados por la mayoría de los miembros que componen el directorio de la caja, ante el cual deberán solicitarse.

En caso de disconformidad del interesado, la resolución del directorio será apelada ante el juez civil en turno, quien, con las constancias del expediente administrativo u otras

que, de oficio y para mejor proveer, solicite de las autoridades de la caja, resolverá sobre la correcta o incorrecta aplicación de la ley.

Art. 63. — Derógase toda disposición de otras leyes que se oponga a las de la presente.

Art. 64. — Comuníquese al poder ejecutivo.

Dado en la sala de sesiones del senado argentino, en Buenos Aires, a 27 de septiembre de 1920.

BENITO VILLANUEVA.

Adolfo J. Labougle.

*Honorable cámara:*

Vuestra comisión de legislación del trabajo en minoría ha estudiado el proyecto de ley pasado en revisión por el honorable senado referente a jubilaciones de empleados de servicios públicos; y por las razones que os dará el miembro informante, os aconseja en su reemplazo la sanción del texto sancionado por la honorable cámara de diputados el 14 de marzo de 1919, que se transcribe a continuación, eliminando de él el inciso f) del artículo 19, por lo cual se cambia la numeración.

Sala de la comisión, enero 28 de 1921.

Augusto Bunge.

*El senado y cámara de diputados, etc.*

Artículo 1.º — Créase la Caja de jubilaciones, pensiones y subsidios para el personal permanente de las empresas particulares de tranvías, teléfonos, gas y electricidad, constituidas en virtud de autorizaciones del gobierno nacional y de la municipalidad de la capital federal, aun cuando éstas, por su naturaleza, se extiendan más allá del perímetro del municipio. (1.º del despacho).

Art. 2.º — Quedan comprendidos en los beneficios de la presente ley todos los empleados y obreros permanentes de las empresas a que se refiere el artículo anterior, y los de la Caja instituida por esta ley, como asimismo aquellos que hayan sido despedidos después del día 25 de septiembre de 1918, salvo los condenados por delitos comunes.

Se considera empleados u obreros permanentes a los efectos de esta ley, además de aquellos cuya ocupación tenga dicho carácter, a los que tuvieron más de seis meses de servi-

cios continuos en una empresa. (2.º del despacho y agregado del senado a la ley de jubilación ferroviaria).

Art. 3.º — A los efectos de la presente ley, queda reconocida la antigüedad de cada empleado y obrero desde el día en que empezó a prestar servicio.

A los que hayan trabajado en compañías actualmente fusionadas o que lleguen a refundirse, se les acuerda la antigüedad desde el día en que empezaron a prestar servicios en la primitiva empresa. (3.º del despacho).

Art. 4.º — Los beneficios que acuerda esta ley son:

- 1.º Jubilación ordinaria.
- 2.º Retiro voluntario.
- 3.º Pensión por invalidez.
- 4.º Subsidio de viudas y huérfanos. (16 ferrov. adapt. en la forma).

Art. 5.º — La jubilación ordinaria se acordará al empleado u obrero que habiendo prestado 30 años de servicios como mínimo haya cumplido la edad de 55 años, excepto que hubiera trabajado no menos de 20 años como telefonista, motorman, foguista o con horarios nocturnos, o expuesto a la acción de sustancias tóxicas, en cuyos casos tendrá derecho al retiro ordinario desde la edad de 50 años, pero siempre con un total de 30 años de servicios como mínimo. (Substituye al inciso 1.º del artículo 4.º del despacho. 18 ferrov. adaptado a la circ.)

Art. 6.º — El monto de la jubilación ordinaria se calculará con sujeción a la siguiente escala:

- 1.º Hasta cien pesos de sueldo, será igual al noventa y cinco por ciento del sueldo.
- 2.º Desde ciento un pesos hasta trescientos pesos de sueldo, será igual a noventa y cinco pesos más el setenta y cinco por ciento de la diferencia entre el sueldo y cien pesos.
- 3.º Desde trescientos un pesos hasta quinientos pesos de sueldo, será igual a doscientos cuarenta y cinco pesos más el cuarenta y cinco por ciento de la diferencia entre el sueldo y trescientos pesos.
- 4.º Desde quinientos un pesos hasta setecientos pesos de sueldo, será igual a trescientos treinta y cinco pesos más

el treinta por ciento de la diferencia entre el sueldo y quinientos pesos.

5.º Desde setecientos un pesos hasta mil pesos de sueldo, será igual a trescientos noventa y cinco pesos más el veinte por ciento de la diferencia entre el sueldo y setecientos pesos. (Art. 17, jub. ferrov.)

Art. 7.º — El retiro voluntario se acordará al empleado u obrero que, habiendo contribuido efectivamente durante más de veinte años y hasta con cinco años menos de edad que da derecho a la jubilación ordinaria, no alcance al número de años de servicios exigidos por el artículo 5.º Este retiro se calculará a razón de 2,5 por ciento de la jubilación ordinaria por cada año de servicio, deduciendo el 5 por ciento de dicha jubilación ordinaria por cada año menos de edad que da derecho a ella.

Después de 10 años de servicios se tendrá derecho a la devolución de los descuentos sufridos en el sueldo o jornal, más el 4 por ciento de interés, en caso de ser despedido por causas que no signifiquen delito ni falta punible con la exoneración según reglamentos aprobados por el poder ejecutivo, hasta tanto no se dicte una ley reglamentaria del trabajo aplicable a las empresas a que se refiere esta ley.

Las empleadas y obreras que por contraer matrimonio se vieran obligadas por los reglamentos de las empresas a dejar su trabajo, percibirán como retiro el importe total de los descuentos con que hubieran contribuido al fondo de la caja, cuando no tengan derecho a mayor beneficio. (Substituye al inciso 2.º, apartados a, b, y d del artículo 4.º del primitivo despacho).

Art. 8.º — El monto de la pensión por invalidez se calculará a razón de un cinco por ciento del monto de la jubilación ordinaria por cada año de servicios hasta su máximo. (Substituye al inciso 2.º, apartado c) del artículo 4.º del despacho. 19 jub. ferrov.)

Art. 9.º — Corresponde la pensión por invalidez dentro de las condiciones establecidas en el artículo anterior, al empleado u obrero que después de diez años de servicios fuese declarado física o intelectualmente inhabilitado para continuar en el ejercicio de su empleo, o de otro compatible con su actividad habitual o su preparación comprobada. (Substituye al inciso 2.º, apartado e), del artículo

lo 4.º del despacho, y concuerda con el 20 jub. ferrov., primera parte).

Art. 10. — En ningún caso se podrá acordar retiro por invalidez a quien lo gestione después de seis meses de haber dejado de formar parte del personal de las empresas. (27 jub. ferrov.)

Art. 11. — Las pensiones por invalidez se acordarán con carácter provisorio, y los beneficiarios quedarán sujetos a las revisiones que, en número de dos anuales como máximo, imponga el directorio de la caja dentro de los 5 años posteriores a su otorgamiento, a partir de cuya fecha se considerarán definitivas. (28 ferroviaria).

Art. 12. — No se podrá acordar pensión por invalidez, sin previo informe del Departamento Nacional de Higiene, o del médico o médicos designados al efecto por el directorio, respecto de las causales de imposibilidad física o intelectual alegadas. Sin perjuicio de esto, el directorio ordenará todas las averiguaciones que estime convenientes. (29 ferroviarios).

Art. 13. — Únicamente los que hayan obtenido jubilación ordinaria podrán volver al servicio. En este caso, el jubilado cesará en el goce de la jubilación, y percibirá solamente el sueldo asignado al nuevo empleo. Abandonado éste, volverá al goce de la jubilación, sin que pueda interponer reclamo alguno para que le sea aumentada. (30 ferroviarios).

Art. 14. — Exceptúase de lo dispuesto en el artículo anterior al pensionado por invalidez cuyos servicios fuesen utilizados en otro empleo. En este caso percibirá, además del sueldo, la fracción de la pensión por invalidez que acuerde el directorio de la caja, proporcionalmente a la disminución sufrida en su capacidad de trabajo. Si alcanzase los años de servicios para obtener la jubilación ordinaria, le será acordado retiro definitivo igual al monto del ordinario que corresponda al sueldo de su nuevo empleo, más la fracción de la pensión por invalidez que hubiere percibido. (31 ferroviarios).

Art. 15. — Las jubilaciones, pensiones y subsidios serán acordadas por el directorio de la caja, ante el cual deberán solicitarse; una vez concedidas, serán pagadas desde el día en que el interesado deje el servicio.

En caso de disconformidad del interesado, la resolución del directorio será apelada ante el juez civil en turno, quien, con las constancias del expediente administrativo u otras

que, de oficio y para mejor proveer, solicite de las autoridades de la caja, resolverá, sin ulterior recurso, sobre la correcta o incorrecta aplicación de la ley. (32 ferroviarios, modificada la instancia).

Art. 16. — En caso de fallecimiento de un empleado u obrero jubilado o con derecho a jubilación, la viuda y los hijos menores, o a falta de éstos los padres impedidos y los menores cuya subsistencia hubiera tenido a su cargo el causante, tendrán derecho a un subsidio pagadero en mensualidades, equivalente a la mitad del retiro correspondiente al causante, por el término de diez años.

El derecho a subsidio se extingue, para la viuda, en caso de contraer nuevas nupcias; para los menores varones al cumplir la edad de 18 años; para las hijas o alimentarios mujeres, al cumplir la mayor edad o contraer matrimonio. (Substituye al inciso 3.º, artículo 4.º del despacho. Concord. con el capítulo V ferrov.)

Si el fallecimiento ocurriera antes del término de la jubilación, pero después de haber prestado no menos de diez años de servicios, los beneficiarios mencionados tendrán derecho a una indemnización equivalente a la del segundo apartado del artículo 7.º.

Art. 17. — El monto de las jubilaciones, pensiones y subsidios se calculará sobre el promedio de los sueldos o jornales percibidos durante los últimos cinco años de servicios. (Inciso 7.º, art. 4.º del despacho).

Art. 18. — Las interrupciones en los servicios ocurridas antes de la promulgación de esta ley, que no hayan excedido de 5 años, causadas por renuncia del empleado u obrero, supresión del empleo por economía u otras causas que no afecten su honorabilidad, no perjudicarán los derechos que se le acuerdan, ni se considerarán como tales interrupciones las originadas por servicio militar obligatorio, enfermedad o fuerza mayor debidamente justificada. En caso de motivos de salud o de supresión del puesto por razón de economía, tampoco quedarán perjudicados esos mismos derechos, cuando medianan interrupciones de no más de 3 años posteriores a la promulgación de la presente ley.

Los servicios a computarse sólo comprenden a los empleados y obreros permanentes, sea cual fuere la forma en que perciban sus haberes y prestados en cualquiera de las empresas a que se refiere el artículo 1.º de esta ley, no pudiendo computarse sino los de una sola

empresa cuando al mismo tiempo el empleado u obrero prestara servicios en alguna de las otras.

En el cómputo final de los años de servicio, las fracciones de año se computarán como años enteros, si excedieran de 6 meses y en caso contrario, no serán tomadas en consideración. (Incisos 4, 5 y 6 del artículo 4.º del despacho).

Art. 19.—El capital de la caja se formará desde la fecha de la promulgación de esta ley:

- a) Con el importe del 5 o/o sobre los sueldos de todos los empleados y obreros permanentes de las empresas.
- b) Con el importe de dos meses de sueldo pagaderos en 60 mensualidades, de cada empleado u obrero que cuente con más de 20 años de servicios; de un mes y medio de sueldo, pagadero en 45 mensualidades, de cada empleado u obrero que cuente de 10 a 20 años de servicios, y de un mes de sueldo, pagadero en 30 mensualidades, de cada empleado u obrero que cuente con menos de 10 años de servicios.
- c) Con el importe del primer mes de sueldo de cada empleado u obrero nuevo, el que se abonará en 30 mensualidades.
- d) Con la diferencia del primer mes de sueldo, cuando el empleado u obrero pase a ocupar un empleo mejor rentado o perciba un aumento de sueldo.
- e) Con una contribución mensual de las empresas igual al 8 o/o de los sueldos y jornales de todos sus empleados y obreros de cualquier naturaleza, siempre que el sueldo no exceda de mil pesos mensuales, en cuyo caso la contribución se pagará solamente sobre esta última cantidad.
- f) Con los intereses y beneficios procedentes de la colocación de los fondos de la caja.
- g) Con las donaciones y legados que se le hagan. (Artículo 5.º del primitivo despacho).

Art. 20.—Los fondos y las rentas que se obtengan de esta ley serán de exclusiva propiedad de las personas comprendidas en sus disposiciones, y con ellos se atenderá el pago de las jubilaciones, pensiones y subsidios que se acuerden en lo sucesivo, de conformidad a la misma.

En ningún caso podrá disponerse de ellos para otros fines, bajo la responsabilidad personal de los miembros del directorio, que se hará efectiva judicialmente en sus bienes, previa decisión del poder ejecutivo. (Artículo 11, ferrov.).

Art. 21.—Todos los fondos de la caja serán depositados en cuenta personal especial en el Bancó de la Nación Argentina, salvo las sumas que fije el directorio como indispensable para los pagos corrientes. (Art. 12 ferrov.).

Art. 22.—Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, los fondos de la caja, descontadas las sumas indispensables para los pagos corrientes, serán invertidos, previa resolución del directorio en cada caso, de manera que produzcan el mayor interés y la más frecuente capitalización, en títulos de renta nacional, o que tengan la garantía subsidiaria de la nación. (Art. 13 ferrov.).

Hasta el 50 por ciento de los fondos capitalizados podrá ser invertido en préstamos a los empleados u obreros comprendidos en esta ley, con garantía de primera hipoteca, y con destino exclusivo a la construcción de casas para habitación de sus propietarios, de un valor no superior a \$ 10.000. Estos préstamos gozarán de un interés no mayor del 7 o/o anual y se pagarán por amortizaciones acumulativas en un plazo que no exceda de 30 años, pudiendo ser combinados con un seguro ordinario de vida. (Nuevo).

Art. 23.—Las empresas a que se refiere la presente ley están obligadas a practicar los descuentos a que se refieren los incisos a), b), c) y d) del artículo 18 en los sueldos del personal de sus respectivas dependencias, y a depositarlos mensualmente en dinero efectivo en el Banco de la Nación Argentina, a la orden de la caja, dentro de los 30 días siguientes de cada mes vencido, sin deducir cantidad alguna por ningún concepto. (Art. 6.º del primitivo despacho).

Art. 24.—Las sumas con que deben contribuir las empresas de acuerdo con el inciso c) del artículo 18 de la presente ley, deberán ser depositadas en el tiempo y forma que para el depósito de los descuentos establece el artículo anterior. (Art. 7.º del primitivo despacho).

Art. 25.—Las empresas que no cumplieran con las disposiciones de los artículos precedentes, incurrirán en una multa de \$ 500 diarios después de la intimación que, al efecto

de ese cumplimiento, debe hacerles el presidente del directorio de la caja, quien tendrá personería para promover ante el poder ejecutivo, o los tribunales de justicia, las acciones ejecutivas pertinentes. (Art. 8.º del primitivo despacho).

Art. 26.—La administración de la caja estará a cargo de un directorio formado por tres representantes de las empresas y tres de los obreros y empleados de las mismas, y un presidente designado por el poder ejecutivo con acuerdo del senado. (Substituye al artículo 9.º del primitivo despacho y concuerda con la ley de jubil. ferrov.).

Art. 27.—Para la elección de sus representantes, cada una de las empresas dispondrá de un número de votos proporcional al total de sueldos y salarios abonados en el año inmediato anterior.

Los representantes de los empleados y obreros serán designados con voto secreto por una asamblea de delegados, los cuales serán electos, sin intervención de las empresas, en comicios con votación secreta, por los empleados y obreros permanentes mayores de 18 años, a razón de un delegado por cada 500 empleados y obreros o fracción no menor de 250.

El poder ejecutivo reglamentará los trámites electorales y del escrutinio de acuerdo con estas bases, y presidirá la primera elección por intermedio del departamento nacional del trabajo y la inspección de justicia, estando la dirección de las siguientes a cargo de la caja, con intervención de la inspección de justicia. (Substituye al artículo 10 del primitivo despacho).

Art. 28.—El directorio nombrará y renovará a los empleados de la caja; dispondrá la percepción e inversión de sus fondos, fiscalizando a las empresas en lo pertinente; acordará las jubilaciones, retiros, subsidios y demás beneficios de la caja; decidirá sobre las reclamaciones de los beneficiarios; fijará un presupuesto de gastos que será satisfecho con fondos de la caja; dictará el reglamento general de ésta y levantará el padrón de empleados y obreros permanentes que tenga cada empresa, expresando el sueldo, categoría y años de servicios, a los fines de la presente ley (11 del primitivo despacho).

Art. 29.—Cuando alguna de esas empresas pase a ser propiedad del estado o de la municipalidad, de acuerdo con las respectivas concesiones o por convenios ulteriores, el ré-

gimen de esta caja quedará subsistente para sus respectivos empleados y obreros.

Art. 30.—El monto de la jubilación, retiro, pensión o subsidio que se acuerda en virtud de esta ley no excederá de lo que corresponda a un sueldo máximo de un mil pesos moneda nacional por mes, aunque el beneficiario goce de mayor retribución. En tal caso, no se sufrirá el descuento sino sobre el sueldo que sirve de base a la jubilación. (Art. 13 del primitivo despacho).

Art. 31.—Ninguno de los beneficios concedidos por esta ley se acordará a los empleados y obreros actualmente en condiciones de obtenerlos, sin después de haber transcurrido tres años de su promulgación. (Art. 14 del primitivo despacho).

Art. 32.—Las empresas están obligadas a suministrar al directorio de la caja los informes que solicite sobre su respectivo personal, cuyo número, retribuciones y sueldos que han de regir para cada año siguiente, deberán hacer saber al directorio antes del 1.º de octubre de cada año, pudiendo ser penadas con multas de 500 a 2000 pesos por el directorio de la caja, las empresas que no cumplieran con esta disposición. (Art. 15 del primitivo despacho).

Art. 33.—La caja formulará un censo de los empleados y obreros comprendidos en la presente ley, y un estudio matemático sobre las bases de la técnica actuarial, dentro de los tres primeros años de su funcionamiento, cuyo resultado se elevará al poder ejecutivo, proponiendo las modificaciones que creyere convenientes.

Art. 34.—Comuníquese al poder ejecutivo.

**Sr. Rodríguez (C. J.)** — Pido a palabra.

Este asunto ya tardaba mucho en ser sancionado por la honorable cámara y por eso es auspiciosa su resolución de tratarlo hoy.

La comisión ha tenido en cuenta esta premura para hacer su despacho; y para evidenciar el interés con que ha acogido esta iniciativa, ha redoblado su tarea, y ha presentado su despacho, como fruto de un estudio meditado, dejando de lado solamente el proponer algunas mejoras de detalle, a fin de no retardar la sanción de la ley.

El estudio hecho por la comisión puede concretarse en estas breves palabras.

No hay en la sanción prestada por el honorable senado modificaciones fundamentales que puedan dilatar la sanción del proyecto que él nos remite. Son meras modificaciones de detalle. De tal manera que para satisfacer los anhelos públicos y el voto de la cámara, la comisión ha dejado de lado, como he dicho, esos pequeños perfeccionamientos que podría introducir en este despacho del senado y ha preferido aconsejar la sanción lisa y llana del proyecto como viene del honorable senado.

Este asunto ya fué considerado en las sesiones de marzo de 1919, tratándose un proyecto de nuestro malogrado colega el doctor Veiga, presentado en el año 1917. Desde el año 1919 pasó esta iniciativa a la revisión del senado. En su comisión ha permanecido desde entonces hasta fines del año 1920. De tal modo que la comisión del senado no pudo expedirse en tiempo y de aquí que se le aplicara la caducidad de la ley Olmedo. En atención a ésto y para satisfacer los anhelos públicos, la comisión del honorable senado tomó por sí la iniciativa; redactó el proyecto que está a consideración de la cámara; lo sometió a un estudio detenido, y luego fué sancionado por ese cuerpo con leves modificaciones.

El miembro informante de este despacho, doctor Gallo, manifestó en su elocuente discurso, que la labor de la comisión había sido de resumen, de síntesis, procurando dar cabida en el despacho que sometía a la consideración del senado a las disposiciones ya vigentes en una ley similar de empleados y obreros ferroviarios y a las de la sanción de la cámara de diputados del año 1919, y por último, a las disposiciones contenidas en el proyecto del señor diputado Vergara, presentado en las sesiones de este período de la honorable cámara.

En realidad, estudiando detenidamente el despacho de la comisión del senado se advierte que sus modificaciones son de detalles, salvo una que otra fundamental, que la cámara no

tendrá inconveniente en aceptar, porque mejora el mecanismo de la ley.

Es, pues, un asunto que no puede ofrecer dificultad a la honorable cámara, porque ya lo ha tratado en el período pasado, y sobre todo si se tiene en cuenta que tanto el articulado general de la ley como las disposiciones de detalle en general concuerdan con la legislación vigente relativa a pensiones y jubilaciones ferroviarias.

Podría, a grandes rasgos, informar a la cámara sobre el mecanismo de este proyecto en su contextura general y en sus detalles.

En primer término, la comisión del senado al modificar la forma de redacción de la sanción de diputados ha tratado de darle una más orgánica y lógica. Para esto ha tomado los grandes cuadros de clasificación de la ley de jubilaciones y pensiones ferroviarias, empezando por el capítulo relativo al objeto de la ley, por el capítulo de los fondos; por el de las jubilaciones; por el de las pensiones; por el de la administración y las disposiciones generales. Por lo que respecta al articulado, debo decir que de la ley ferroviaria ha tomado textualmente no menos de 40 artículos de los 64 que constituyen la referida ley, fuera de algunos otros que tienen gran analogía con lo preceptuado en el despacho sometido a la deliberación.

En segundo término, debo advertir a la cámara — para que sepa la facilidad con que puede sancionar sin ninguna desconfianza este proyecto — que la sanción que prestara la honorable cámara el año 1919 contenía 34 artículos, de los cuales el presente despacho del senado que está a consideración de la cámara comprende no menos de 25 artículos tomados textualmente de esa sanción, y algunos otros con modificaciones. Y por último, el despacho que está a consideración de la cámara también tiene algunas modificaciones y reformas de estructura y detalle, las que han sido aceptadas por el señor diputado Vergara.

Como decía al principio, esta ley ha sido estudiada con toda detención y



prolijidad en la comisión de la cámara de senadores. Una laboriosa información ha realizado llamando a su seno a los jefes de las diversas empresas comprendidas en esta ley, y a las comisiones de obreros; de tal manera que en todo, es el resultado no sólo de la experiencia de la legislación vigente, sino de los intereses colectivos, en armonía con los de la industria que beneficia.

Para que la honorable cámara se dé clara cuenta de las modificaciones y reformas que contiene este proyecto con relación tanto a la ley de jubilaciones ferroviarias como a la primitiva sanción que prestara este cuerpo a una iniciativa semejante, me permitiré examinarlas.

Por ejemplo, en el capítulo primero, relativo al objeto y beneficiarios de la ley, solamente introduce una modificación fundamental: la contenida en el artículo 2.º, que consiste en una extensión o ampliación de los beneficios de la jubilación y de pensión a todas las empresas análogas del país. En esto no habría ningún peligro desde el momento que a todas las coloca en la misma situación jurídica y económica. Es, por otra parte, el preludio de la sanción de mañana del seguro obrero nacional.

En el capítulo segundo, relativo a fondos de la caja, sólo hace una modificación fundamental: la del inciso k), que fija el aporte subsidiario del estado a los fondos de la caja. En la discusión en particular ya explicaré la razón de ser de esta modificación fundamental, que no tiene mayor importancia desde el momento que deja librado al juicio de la misma cámara el fijar oportunamente cuál ha de ser la magnitud y la importancia de ese recurso pecuniario que habrá de gravitar en el presupuesto.

En el capítulo tercero, relativo a jubilaciones, no hace sino alguna modificación de detalle; en el artículo 12, por ejemplo, que contempla la situación en que podrían encontrarse los ex empleados que reingresaran.

En el capítulo cuarto, relativo a pen-

siones, hace la comisión del senado una modificación de importancia y fundamental, desde el momento que salva una omisión de la primitiva sanción de la cámara, en la cual solamente se habían legislado beneficios con el nombre de subsidios, para el caso de viudez. En cambio, el capítulo cuarto del despacho del senado prevé la situación lógica como correspondía, y establece las pensiones para los parientes del empleado u obrero como lo hace la ley de jubilación de los ferroviarios.

De manera que en este capítulo, que es una innovación fundamental, la comisión del senado no hace sino mejorar la ley, ponerlas en concordancia con la legislación vigente; y tan es así que del capítulo respectivo de la ley de jubilaciones y pensiones ferroviarias toma todos los artículos textualmente, con una ligera modificación en uno de ellos.

En el capítulo quinto, relativo a la administración y a la constitución del directorio, no hay modificaciones de importancia. Ese capítulo ha sido formado con las disposiciones de la primitiva sanción de la cámara de diputados, tomando los tres primeros artículos, y con dos artículos de la ley de jubilaciones y pensiones ferroviarias.

El capítulo sexto, sobre las disposiciones generales, no tiene tampoco modificaciones fundamentales.

El artículo 5.º trata la cuestión del descuento a los empleados y obreros que hayan prestado servicios con anterioridad a la fecha en que se ordenó el descuento forzoso por la ley, artículo que concuerda, más o menos, con el artículo 48 de la ley de ferroviarios. El artículo 52, que también es nuevo, es igual al 49 de la ley de ferroviarios. El 53 es una disposición nueva, relativa a los empleados y obreros ya jubilados por las empresas en virtud de ciertas cajas particulares que existían. El artículo 54, también nuevo, se refiere a los empleados y obreros que antes hayan prestado servicios en diversas reparticiones de la administración nacional, municipal o de los ferrocarriles del estado. El artículo 58 trae una modifi-

cación de importancia que faculta a las empresas a aumentar las tarifas cuando lo exija el estado de sus finanzas para costear la cuota con que deben contribuir, del ocho por ciento; pero su importancia estaría muy reducida si se tiene en cuenta la modificación aceptada por el señor senador Gallo, a propuesta del señor senador Melo, en el sentido de que se hará previo control e intervención de las autoridades que tienen la facultad fiscalizadora del poder público, para evitar despojos a la colectividad, y con ello se evitará al mismo tiempo la bancarrota de la empresa. El artículo 59 es semejante al 60 de la ley ferroviaria. Prevé el caso del levantamiento de un censo en el plazo de tres años. El artículo 60 se refiere a la obligación que se impone a la caja de hacer una clasificación de sus empleados por la diversidad de sus servicios y puestos que desempeñan, a fin de tener un criterio más exacto y proveer después a las reformas necesarias.

Tales son las modificaciones que el despacho del senado introduce a la legislación vigente de las jubilaciones y pensiones ferroviarias, y a la primitiva sanción de diputados.

Hay, en el despacho del senado que se considera, un error de expresión literal en el artículo 15, que es idéntico al que contiene la ley de ferroviarios en su artículo 17, en donde dice: "la diferencia entre cien y trescientos pesos"; y "la diferencia entre trescientos y mil pesos". Pero la comisión cree que para no entorpecer la sanción de esta ley basta la salvedad, desde que nadie podría sacar de un texto literal una interpretación que conduzca a un absurdo.

Recapitulando diré, pues, dejando de lado esas otras reformas de que la cámara se habrá apercibido, que son de detalle, que perfeccionarían la ley, las modificaciones que tienen alguna importancia podrían ser tres: primera, la relativa a la extensión de los beneficios de esta ley a todas las empresas análogas el país, previa intervención de los gobiernos; segunda, el aporte por el estado a los fondos de la caja

en cuanto fuera necesario por el momento para mantener su equilibrio financiero, y tercera, la facultad que se concede a las empresas de aumentar la tarifa en las condiciones antedichas. Tales son las modificaciones fundamentales.

En presencia de ellas, la comisión cree justificado su despacho y aconseja a la cámara la aprobación lisa y llana de la sanción del honorable senado. Cree que con ello satisface un alto interés colectivo en este instante, y afirma la orientación de su política social. Esta ley, como otras de su género, ya son doctrina consagrada en leyes positivas en todas las naciones civilizadas; y nosotros venimos a dictarlas quizás con alguna tardanza. Es necesario que el parlamento argentino responda a este movimiento de orden científico y legislativo universal. Acaso se necesite que cuanto antes se vaya en socorro de la situación económica de la población trabajadora, sancionando el seguro obrero para asegurar con toda justicia el descanso tranquilo en la vejez o invalidez a los que dan todo su esfuerzo vital a la riqueza argentina.

La comisión, por algunas investigaciones de carácter particular que ha hecho, puede expresar a la cámara que si hay algún problema social que interese resolver cuanto antes, es el de proveer a la tranquilidad del obrero, asegurándole la situación de retiro a que tienen derecho aquellos que participan en la creación de la riqueza y el progreso de la nación, agotando sus energías de trabajo material e intelectual durante toda su vida útil, sin otro cercano porvenir en la vejez que la miseria o la muerte.

Con estas breves consideraciones entrego a la cámara el despacho de la comisión de legislación del trabajo que interpreta en este momento los anhelos públicos, que reclaman una acción enérgica y justiciera en la orientación de la política social de la nación. (*¡Muy bien! Aplausos*).

**Sr. Bunge.** — Pido la palabra.

Necesito explicar con la mayor brevedad que me sea posible, que exigen

las circunstancias de apremio en que la cámara ha resuelto discutir esta ley, las razones de fondo por las cuales he considerado de mi deber firmar en disidencia el despacho de la mayoría de la comisión, aconsejando, en cambio, sancionar en reemplazo del proyecto venido en primera revisión del senado el articulado que esta honorable cámara sancionó el año 1919.

Son razones de principio y no de detalle. Porque se trata de dos cuerpos de ley que, a pesar de parecer ante un examen superficial, que desgraciadamente los señores diputados no han podido hacer porque no conocen su texto, que divergen tan sólo en cuestiones de detalles, se inspiran en un criterio fundamentalmente opuesto.

La oposición de criterio entre el proyecto sancionado en la cámara de diputados y el sancionado por el senado, se manifiesta en los tres puntos fundamentales de la contextura de una ley de seguro de trabajadores.

El proyecto sancionado en la cámara de diputados, en el cual tuve el honor de colaborar como miembro interino de la comisión y como miembro informante en particular — fué miembro informante en general el señor diputado Nicolás Avellaneda — prevé una serie de beneficios mensurables con una cierta precisión, sobre la base del conocimiento adquirido por el número de empleados y por la composición de edad de los mismos en las empresas destinadas a ser incorporadas al seguro. Estos beneficios son mensurables porque se trata de riesgos conocidos en el retiro de vejez, en el seguro de invalidez y en los pequeños beneficios complementarios de estos mismos.

En cambio, en el despacho del senado hay una serie de beneficios que no son mensurables, y que por la experiencia extranjera muy limitada que existe al respecto representan riesgos de considerable valor; principalmente el beneficio de las pensiones a las viudas y a los huérfanos, prácticamente imposible de calcular entre nosotros por no existir estadística alguna al respecto.

En segundo lugar, el proyecto de la

cámara de diputados, basado en beneficios mensurables con cierta precisión, preveía recursos fijos, adecuados a esos beneficios de acuerdo con la experiencia actuarial argentina, no enteramente adecuados, tal vez, pero al menos suficientes para asegurar la subsistencia de la caja durante un período mínimo de veinte años.

Esto en cuanto a las divergencias de criterio financiero sobre las bases de la caja.

Hay una oposición más grave en cuanto al criterio social que preside la sanción de la cámara de diputados y el que inspira la sanción del senado. Me refiero a la fuente de recursos destinados a cubrir este seguro de un gremio relativamente poco numeroso, si se lo compara con la totalidad de los trabajadores de la república.

En la sanción de la cámara de diputados, se establecía la contribución de las empresas del ocho por ciento enteramente a cargo de éstas; no se les autorizaba para aumentar sus tarifas en modo alguno; era, por lo tanto, un seguro que corría todo por entero por cuenta del ramo de producción a que pertenecen los respectivos asegurados; no era una carga pública, no era una carga para el conjunto de los trabajadores del país. En cambio, el proyecto que viene en revisión del senado, que establece beneficios inmensurables, forzosamente ha tenido que establecer recursos no fijos, recursos vagos, indeterminados, previendo un déficit considerable a consecuencia de las mayores cargas que se le imponen a la caja. Establece que el estado, es decir, todos los habitantes en general concurren a cubrir el déficit que eventualmente se produzca y, al mismo tiempo, la contribución del ocho por ciento, que nominalmente está a cargo de las empresas, es transportada sobre las espaldas de todo el público que usa esos servicios, sobre los trabajadores que son los que más necesitan del tranvía, cuyas empresas forman la mayor masa del grupo asegurable por la ley.

Es por lo tanto el espíritu de la sanción del senado el otorgamiento de un privilegio a un grupo muy limitado de

obreros, a expensas de todos los trabajadores que no gozan de igual privilegio. Mientras que la sanción de la cámara, al acordar este beneficio a un grupo de obreros de un ramo determinado de industria, fué, como es legítimo, como es económico y como es social, diremos así, considerar ese beneficio como una parte del salario, poniendo el costo íntegro del seguro a cargo de la propia industria.

Por esas razones, señores diputados, considero contraria la sanción del senado al punto de vista del seguro social, entendido, no en su forma ampliamente socialista, sino en la forma en que puede aplicarse dentro del régimen capitalista de la producción y del intercambio.

No se trata de un derecho común a todos los trabajadores, sino de un privilegio para un limitado número de ellos, costado por la comunidad; mientras que el concepto del seguro social es que los beneficios a cargo de la comunidad deben ser extensivos a todos los trabajadores para que no haya privilegio de ninguna clase.

Nuestro partido tiene en su programa mínimo y en su plataformas electorales la reivindicación del seguro social. Hemos presentado ante la cámara de diputados un proyecto de código de seguro nacional redactado con un criterio prudente, que casi podría llamarse conservador desde el punto de vista de las prestaciones que pudieran obtenerse para el conjunto de los trabajadores de la república; he colaborado en esta cámara en todas las leyes de seguro parcial para determinadas agrupaciones de obreros que han estado a estudio de esta cámara. Hemos aceptado en principio el seguro parcial para determinados grupos de obreros, a pesar de que tenemos plena conciencia de los riesgos que ello importa para nuestro ideal de seguro nacional para todos los trabajadores. Lo hemos aceptado en la convicción de que en esa forma se podría abrir una brecha en el muro de los prejuicios existentes todavía entre nosotros contra la política social, y despertar en el conjunto de los trabajadores la conciencia

de la inmensa importancia que para ellos tiene exigir una legislación de esta naturaleza.

Pero al considerar estas soluciones de detalle, no podemos derogar, en modo alguno, el principio fundamental que he enunciado, por cierto en forma demasiado somera y superficial, en el deseo de no extenderme; tampoco podemos derogar el principio de que un retiro de vejez debe ser "un retiro de vejez", literalmente, y no un retiro arbitrariamente concedido, a cualquier edad, en plena capacidad productiva aun, porque consideramos antieconómico, contrario a los propios intereses de los trabajadores, de cuyo trabajo tienen que proceder directa o indirectamente los recursos destinados a costear sus retiros, el concederlos en edad prematura y de un monto demasiado elevado; porque consideramos que eso implica exigir de los trabajadores que rebajen su nivel de vida en el presente, en la edad productiva, en que las necesidades son mayores para costear la subsistencia de la familia, con el propósito de retirarse del trabajo en una edad en que todavía son capaces y en que las necesidades son menores, porque ya no se tiene una familia a su cargo. Consideramos, por lo tanto, que si se extendiera a todos los hombres de la república el derecho a un retiro a una edad en plena aptitud productiva, por ejemplo, a los cuarenta y cinco o cincuenta años, eso representaría el rebajamiento general del nivel de vida del pueblo trabajador de la república. Y es necesario decir esto en voz bien alta a nuestros trabajadores, para que comprendan que no deben jamás sacrificar el presente productivo al porvenir, y subordinarse a una promesa de retiros.

A muy grandes rasgos, sobre la base del censo de 1914, más de medio millón de personas en edad superior a 50 años tendrían derecho, en caso de extenderse a ellos el retiro a los cincuenta años, a una pensión, calculando sólo en una cuarta parte del total de ambos sexos en esas edades los que tuvieran derecho a pensión. Representaría, por lo tanto, un retiro a esa edad,

una suma equivalente al presupuesto de la nación, que tendría que ser sudada por los trabajadores entre 18 y 50 años; y sudada por partida doble, porque sería reducida la cantidad de hombres en estado de producir.

Creemos, pues, que al sancionarse leyes parciales de seguro, se deben tener siempre presentes los principios generales que deben regir una legislación de seguro social, en forma que no sea él antieconómico, en forma que acuerde los retiros a la edad en que ellos sean realmente necesarios, y que pueda extenderse a toda la población laboriosa, que pasa en la república de dos millones y medio de personas.

Leyes que no tengan presentes estos principios, leyes que basando su financiación a expensas de todos los trabajadores en beneficio de un limitado grupo de ellos, vienen a establecer en cierto modo, no un sistema social de seguros, sin un sistema antisocial de seguro, porque tienden a convertir a este limitado grupo de beneficiarios, lo mismo que a los funcionarios que hoy gozan de las escandalosas prebendas de la caja nacional de jubilaciones y de la caja municipal, en parásitos del conjunto de la clase productora del país.

Una evolución antisocial de ese carácter ha sufrido en años anteriores la ley de jubilaciones a los ferroviarios, y la ha sufrido ahora el proyecto sancionado en la cámara de diputados sobre jubilación de obrero de servicios públicos municipales, de los cuales el cuerpo más importante y que ha sido decisivo en la sanción del proyecto es el de las empresas de tranvías.

En la ley de jubilación de ferroviarios, incorporó el honorable senado ese artículo que autoriza a las empresas ferroviarias a aumentar su tarifa en proporción,—dice el artículo pertinente,—a la carga que imponía la ley para contribuir a la caja de jubilaciones. Las empresas han aumentado sus tarifas en proporción mucho mayor, y en esa forma se ha conseguido el resultado de aumentar, las ganancias de las empresas además del de hacer recaer sobre todo el conjunto del país

los beneficios de una categoría particular, cosa que evidentemente hubiera sido lógica y natural tratándose del conjunto de los trabajadores, pero que en este caso no ha tenido otro propósito real que descargar al privilegio capitalista de las empresas ferroviarias de la obligación de costear el seguro de sus trabajadores, que es un beneficio para ellas mismas, porque contribuye a estabilizar el personal. Lo mismo ocurre ahora con el proyecto de jubilación de tranviarios.

Las otras modificaciones que ha sufrido en el senado el proyecto son consecuencia en cierta manera lógica de este principio, de hacer recaer sobre el conjunto del pueblo trabajador y no sobre la industria respectiva, el costo del seguro de las personas que ella ocupa.

Ha sido el senado más “generoso” que la cámara en cuanto al límite de la edad, primero para con los ferroviarios, luego para con los tranviarios: ha sido más “generoso” en cuanto al monto de los beneficios, en cuanto al tiempo de contribuciones, o de servicios sin contribución, para tener derecho a adquirirlos; ha sido el senado muy generoso con la plata ajena, han sido las empresas muy generosas con plata que no era de ellas sino que iban a cobrarla del público.

En cuanto a esta ley de tranviarios, el senado ha rebajado la edad para el conjunto de los obreros, de los 55 a los 50 años, y en esto y en el monto de las pensiones, que ha aumentado también, nos resulta el senado más “extremista”, más “maximalista” en mantería de seguro social, — y es por cierto un caso muy curioso, — que el gobierno bolchevique de Rusia. El senado argentino, cuyo conservatismo es bien conocido, cuyas comisiones se han negado a despachar leyes de fundamental importancia y muy modestas en sus pretensiones, como la del pago de salarios en moneda nacional, cuando se ha ocupado del seguro de determinados grupos de obreros no ha considerado bastante lo que ha parecido bastante al gobierno de los soviets de Rusia.

**Sr. Frugoni.** — Es el instinto de conservación.

**Sr. Bunge.** — En el seguro social que rige en los soviets de Rusia, la edad para los retiros es de 60 años, y el monto de los mismos es equivalente a una fracción del salario medio normal. Son, por lo tanto, beneficios muy inferiores a los que el senado acuerda en esta ley. ¿Cómo es posible, cómo es creíble que este cuerpo tan conocidamente conservador, sobre todo en materia de legislación social, nos resulte tan “avanzado” en materia de leyes particulares?

Ello se explica por el mecanismo de la ley que ha elaborado el senado, decididamente opuesto al principio del seguro social. En ella ha sido concedido un privilegio a un grupo limitado de obreros; y por ese solo hecho, se tiende a mantener a los respectivos obreros,—y este es el gravísimo inconveniente accesorio de las cajas pequeñas de seguros,—atados a sus respectivas empresas, para no perder los derechos que hayan adquirido en los diez, quince años o más de servicios prestados, pues tienen que sentirse mucho menos impulsados a cualquier movimiento que los exponga a perder su puesto.

Por eso se ha dicho que estas leyes de beneficio particular a determinados gremios, pueden tener una contextura tal que resultan para ellos un medio de esclavización por la beneficencia.

Hay otra coincidencia que nos explica el alcance de esa articulación sancionada por el senado, y es el empeño de la propia empresa de tranvías Anglo Argentina para que se sancione esta ley, empeño que ha reconocido la propia comisión del senado, ante la cual esa empresa se ha presentado pidiendo la pronta sanción de la ley.

Evidentemente, si esa empresa hubiera debido contribuir con el 8 por ciento de sus utilidades, no hubiera tenido tanto entusiasmo por la sanción de la ley. Su entusiasmo se explica porque no le cuesta nada el seguro de sus obreros, y en cambio, ella goza de la ventaja de tenerlos más sujetos en su trabajo por ese temor a perder los

beneficios a que han adquirido derecho durante el tiempo de su permanencia en él.

Tanto más típica es esta actitud de la empresa de tranvías, cuanto que ella se ha caracterizado por la persecución sistemática a la sociedad gremial de obreros tranviarios. Esa empresa gasta fondos ingentes en editar un semanario con el nombre de “El Metropolitano”; que no tiene otro objeto que combatir la organización tranviaria, que convencer a sus propios obreros de que esa organización es absolutamente innecesaria, porque la respectiva empresa es un modelo de filantropía, de inteligencia y de caridad.

En su persecución a la sociedad gremial, la empresa ha llegado hasta conseguir los servicios obsecuentes de la policía de la capital, bajo la dependencia directa del presidente de la república.

La policía de la capital ha impedido sistemáticamente las reuniones de las asambleas del gremio de tranviarios. Más: ha impedido las reuniones de la comisión administrativa con chicanas de la peor especie; ha llegado a negar permiso para las reuniones, sosteniendo que quienes lo solicitaban no eran tranviarios, pues habían dejado de serlo porque la empresa los había expulsado por el delito de ser organizadores del sindicato gremial. Habiéndose presentado luego a pedir permiso, —permiso que no debería solicitarse, tratándose de locales cerrados,—obrero tranviario de uniforme, la policía no se los concedió y esos obreros fueron expulsados por la empresa al día siguiente. Quiere decir que la policía comunicaba a la empresa el nombre de los obreros que formaban parte de la organización gremial.

Se trata, por consiguiente, del interés de la empresa tranviaria por conseguir esta ley, presentándose ante los obreros como dispuesta a “protegerlos” socialmente; se trata tan sólo, digo, de impedir su organización, de paralizar en ellos la conciencia de clase, de mantener en ellos el viejo espíritu de servidumbre.

Y si sancionamos nosotros una ley

que dé carácter permanente al aumento de tarifas, bajo pretexto del seguro social, es decir, que permita a la empresa, por sanción nacional, arrancar del pueblo trabajador de la capital diez millones más por año bajo pretexto de indemnizarla del gasto de un millón y medio que le representa la contribución al seguro de sus obreros, nosotros contribuiremos a la vigencia de ese sistema que quiere imponerse a los tranviarios. Y realizaremos un acto,—hay que decirlo, sin ambages, señor presidente—realizaremos un acto de cohecho de los obreros tranviarios, en beneficio de la empresa que explota su trabajo, y a expensas del conjunto de todos los trabajadores de la capital.

No he de entrar en el análisis de las ventajas que desde el punto de vista de los propios trabajadores; es decir, de la seguridad financiera de la caja, y del derecho del conjunto de los trabajadores del país a no costear privilegios para una pequeña parte de ellos, ofrece la sanción de diputados sobre la del senado.

Tampoco haré notar el gravísimo peligro financiero que impone a esa caja una serie de disposiciones de detalle. En caso que sea necesario, lo haré notar en la discusión en particular.

Me limito a decir, en conclusión, que el proyecto del senado establece una caja sin bases financieras sólidas, una caja que es una institución de carácter francamente parasitario sobre el conjunto de la población de la ciudad, en beneficio de un gremio limitado. Y por eso creo conveniente que la cámara sancione de nuevo el proyecto ya sancionado, porque no adolece de estos gravísimos defectos. El no sería, por lo tanto, un obstáculo a que llegue de una vez a sancionarse en nuestro país un sistema amplio de seguro social para todos los trabajadores, con iguales derechos e iguales deberes para todos, individualmente, e iguales deberes de la comunidad para con ellos.

**Sr. Méndez Casariego.** — Oído la palabra.

Ayer, cuando se hizo moción para tratar este asunto en la sesión de hoy,

fuí de los que la votaron, porque realmente el asunto me merece la mayor simpatía y porque creo que en el fondo hay una acción de justicia que desarrollar.

Pero la información que yo tenía era deficiente. Yo entendía que este proyecto había sido sancionado por la cámara y que venía en segunda revisión del senado. No es así. Reglamentariamente el proyecto que fué votado por esta cámara ha caducado y por el reglamento todo asunto caducado debe darse por no tramitado. De manera que este asunto viene por primera vez a la consideración de la cámara, con esta circunstancia agravante, para ser considerado de inmediato: primero, sin que tengamos por delante los despachos impresos, y segundo que viene con una fundamental disidencia.

Por estas circunstancias, pues, es imposible exigirles a los diputados que puedan dar un voto de conciencia en un asunto de esta naturaleza, en que hay, como decía el señor diputado disidente con este despacho, cuestiones financieras de la más alta importancia, añadiendo él mismo que la base financiera de esta ley es una base falsa que puede llevarnos a consecuencias graves. Es probable que no suceda así; pero nosotros necesitamos apreciar la verdad de la afirmación.

**Sr. Bunge.** — He dicho que la base financiera de esta ley es falsa en cuanto a los recursos fijados; pero hay que tener presente que existe un artículo que establece que el estado cargará con todo el déficit.

**Sr. Méndez Casariego.** — Sí, señor diputado; pero, de todas maneras, no voy a entrar a considerar el fondo de las cosas en el sentido de apreciar si lo que dice el señor diputado socialista, disidente en este despacho, es exacto o no. Yo descarta formar un concepto seguro sobre el asunto, y para poder votar en estas condiciones necesitaría tener por delante e impresa la sanción del senado y los despachos de la mayoría y de la minoría de la comisión. Sé que se trata de un asunto urgente, pero no creo que su urgencia sea de tal naturaleza que nos obli-

que a pronunciarnos en la sesión de hoy.

Por eso pido a los señores diputados — y esta es la moción que formulo — que se postergue la consideración de este asunto hasta la primera sesión que celebre la cámara, imprimiéndose y repartiéndose la sanción del senado y los despachos de la comisión sobre el asunto.

— Ocupa la presidencia el señor vicepresidente 1.º don Teófilo Sánchez de Bustamante.

**Sr. Frugoni.** — Pido la palabra.

Es original, señor presidente, que caduque en esta cámara todo lo útil, todo lo eficaz, todo lo fecundo, todo lo que ampara el porvenir de los trabajadores. Lo que ya ha caducado, lo inútil, lo estéril, no tiene necesidad de caducar.

Voy a votar en el sentido de que el proyecto no vuelva a comisión...

**Sr. Méndez Casariego.** — Mi moción no es en ese sentido, señor diputado.

**Sr. Frugoni.** — Permítame. El señor diputado es un avezado parlamentarista; yo soy — y me honro en decirlo — casi, casi un muchacho de la calle... (*Risas y aplausos*).

**Sr. Méndez Casariego.** — Quería simplemente expresarle al señor diputado que no he formulado esa moción.

**Sr. Frugoni.** — ... por eso, señor presidente, estoy más en relación y más vinculado con los tranviarios, que trabajan en la vía pública... (*Aplausos*).

**Sr. Presidente** (Sánchez de Bustamante). — Se trata de una moción de aplazamiento hasta la sesión próxima.

**Sr. Frugoni.** — Entonces, retirémonos. Y si no venimos aquí a legislar para los trabajadores, ¿qué venimos a hacer? ¡Si no venimos a hacer profesión de fe de nuestra sinceridad en favor de ellos, yo me voy de la cámara!...

Yo no vengo aquí a votar la prórroga de carreras en días jueves al Jockey Club, ni el aumento de sueldo a tal o cual obispo: vengo a favorecer en lo posible, con mi trabajo — con mi trabajo aprendido no aquí sino afuera, muy le-

jos — al trabajador! Me quiero solidarizar en este momento con los hombres que no tienen amparo en su vejez y que son los obreros tranviarios y los ferrocarrileros! (*Grandes aplausos en las galerías*).

Los aplausos, afuera. Y recuerdo, ahora, la frase de López: los aplausos no me elevan ni me intimidan los silbidos!

— Se oye una voz en la barra.

Sí: la emoción del trabajo! ¡Es la expresión que yo recojo de la barra!

No necesito en este momento del aplauso, porque he sido un golpeado por las mismas leyes y por los anacrónicos decretos de los poderes ejecutivos y legislativos que ha tenido el país! ¡En este país no se respeta el trabajo! Pero, diría más, señor presidente; daría mi sanción por un proyecto de ley que pusiera en manos de los trabajadores la dirección de las empresas ferrocarrileras y tranviarias, que no han hecho nada más que explotar a los trabajadores y al público. Y me reafirmaré en cualquiera oportunidad de los conceptos que acabo de decir!

¿Cómo dilatar la aprobación de este proyecto, si con su sanción damos un gran paso para la seguridad del trabajo, en un país que como el nuestro, por la imprevisión de los poderes ejecutivos y legislativos, no tiene siquiera una humilde institución de crédito popular, porque las así se titulan son focos de usura?

Y es premioso decirlo en esta hora en que los hombres jóvenes vinculan las ideas universales con las ideas que se profesan en la república. Es necesario decir que ya no tiene un valor puramente vegetativo el desgaste individual, en lo que se llama la jornada de trabajo! ¡Hay que considerar a ésta como un aspecto más productivo, más dinámico! Se trabaja aquí en las empresas de tranvías y trenes ocho, diez y más horas. ¿Para qué? ¡Para elevar las acciones, sin control por parte nuestra, sin control, mientras los obreros no tienen acciones sobre esas acciones!

¿Hasta cuándo van a estafar esas empresas?



Es preciso conocer el menosprecio con que tratan al obrero y al empleado, máxime si es nativo.

Eso, por otra parte, es un desconcepto que se ha hecho ley; dentro y fuera del país!

He tenido ocasión de observar las deficiencias de los servicios ferrocarrileros de la república. Siendo una autoridad como era, y que me honro en expresar en esta cámara, de profesor de la escuela naval militar de la nación, nos hacían viajar en las peores condiciones, y en esos mismos coches en que viajaba yo, profesor de la escuela naval, viajaban los almirantes, los jefes del alto comando de la escuadra, los que dirigen las fuerzas militares en amparo de la propiedad cuando se levantan los obreros para la reivindicación de sus derechos, cegados muchas veces por la injusticia social.

No me gusta pronunciar la palabra patria ni manosearla, pero en estos momentos invoco el patriotismo, sobre todo de mis compañeros de la diputación radical, para que elevemos el nivel del trabajador en la república. Démosle, pues, estas leyes, porque si no se las damos con votaciones serenas en esta cámara, ellos las tendrán con las reivindicaciones heroicas, aunque haya que derramar sangre, una vez más!

Nada más. (*Aplausos prolongados*).

**Sr. Presidente.** (Sánchez de Bustamante). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

**Sr. Frugoni.** — (*Dirigiéndose al señor diputado José Heriberto Martínez*) ¡Me extraña que el joven señor diputado por la provincia de Córdoba se sonría porque yo creo!...

**Sr. Martínez (J. H.)** — El señor diputado no es nadie para juzgarme.

**Sr. Frugoni.** — El señor diputado es menos para sonreírse de palabras tan noblemente inspiradas como las que he pronunciado! (*¡Muy bien!*)

**Sr. Rodríguez (C. J.)** — Voy a votar en contra de la moción presentada a la honorable cámara por el señor diputado por Entre Ríos, porque creo que sus temores son infundados. La comisión ha hecho un estudio detenido de este asunto y ha podido aconsejar con

toda conciencia este despacho a la cámara.

Como primera consideración, debo hacer presente y recordar al señor diputado que, no solamente la cámara le resuelto tratar este asunto en el orden tercero de las preferencias, sino que también ha fijado la sesión de hoy para tratarlo, con o sin despacho de comisión; de tal manera que, si la comisión no hubiera podido expedirse, el señor diputado tendría que estar completamente enterado del proyecto para tratarlo. Falla, pues, por su base su argumento.

El otro argumento...

**S. Méndez Casariego.** — Mal argumento, porque siempre tendría el derecho de hacer la moción de orden que he hecho hoy, y que puedo reproducir tantas veces como quiera.

**Sr. Rodríguez (C. J.)** — Sí, señor diputado; lo reconozco, pero contesto el argumento.

El segundo argumento creo que consistía en recordar que este proyecto ha caducado. Efectivamente, ha caducado en el senado. El miembro informante de la comisión, senador Gallo, lo reconoció así; pero la comisión en vista de la caducidad de la sanción de diputados, tomó ella misma la iniciativa, y sometió un proyecto a la cámara de senadores, que lo sancionó, pasando, entonces, en primera revisión a la cámara de diputados.

Entrando al fondo de la cuestión, debo decir brevemente que la disidencia, del señor diputado Bunge, miembro de la comisión, no tiene la importancia que debe tener una disidencia de esa naturaleza. Me fundo en lo siguiente, señor presidente. He dicho, al informar en general, que el despacho del senado contiene, de los 34 artículos de la primitiva sanción, 25 literalmente iguales. De manera que, entonces, no podía ser una disidencia *in totum* sino una disidencia parcial que debe plantearse en la discusión en particular.

Yendo más al fondo de la cuestión, y ya lo he expresado en detalle, debo hacer presente estas consideraciones: el despacho del honorable senado, en general, es sólo un conjunto de disposi-

ciones ya conocidas y sancionadas por esta cámara, tomadas de la primitiva sanción de marzo de 1919 y de la ley vigente de jubilaciones y pensiones ferroviarias. En efecto, de las 64 disposiciones del proyecto, tiene 40 que son textualmente iguales a la ley de jubilaciones y pensiones ferroviarias. Y aun en esas 64 hay no menos de 25, según acabo de decir, que son de las que ya sancionó la cámara de diputados. De manera, entonces, que las modificaciones que va a considerar la cámara son de simple detalle, salvo dos o tres, respecto de las cuales el señor diputado o los señores diputados pueden informarse en el debate en particular.

Así es que, por las razones que dí al informar en general, y por las que resumo en este momento, creo que la cámara debe tratar inmediatamente este despacho, como lo resolvió ayer. Así lo reclaman, no solamente los intereses de los obreros que van a ser beneficiados, sino la situación general del país. Es necesario cuanto antes demostrar que estamos dispuestos a dar las leyes que reclama la colectividad para satisfacer su bienestar, el bienestar del trabajador, en este momento absolutamente desamparado; sin leyes que le aseguren las energías del trabajo cuando se han agotado y cuando tiene que sobre llevar todavía los duros embates de la lucha por la existencia, sin otro horizonte que la miseria y la mendicidad en el seno de un pueblo rico y próspero.

El argumento que se hacía para evitar que se sancione una ley de esta naturaleza — seguro parcial — no es tal, porque esto va a precipitar precisamente la sanción del seguro obrero general, como lo he anticipado. Por lo pronto, algunos miembros de la comisión de legislación del trabajo, por informes directos recogidos entre los obreros del país, creen que es una iniciativa parlamentaria que se impone sancionar.

Estas son, pues, las razones que en general autorizan a que adhiera al voto que he enunciado al principio: de es-

tar en contra de la moción propuesta por el señor diputado por Entre Ríos.

**Sr. Méndez Casariego.** — Pido la palabra.

**Sr. Anastasi.** — Pido la palabra.

**Sr. Méndez Casariego.** — Le pido al señor diputado que me permita, porque es una breve rectificación. Quiero simplemente afirmar un hecho.

Yo no tengo el propósito de oponerme a esta ley; al contrario, tengo el propósito de votarla, y es bueno que se entienda que esto que yo digo hoy y esta moción que hago es en interés de los mismos que buscan la ley, que necesitan, no una ley con observaciones, con disidencias, una ley sin discusión, sino una ley que sea tan perfecta como sea posible. Yo hago honor a la comisión de legislación; tengo seguridad de que la ha de haber estudiado y que la ha de haber estudiado bien; pero yo digo, desde mi punto de vista personal, que no estoy habilitado para votar en conciencia. Si voto, votaré con la mayoría de la comisión, porque son mayoría, y haciendo un acto de adhesión y de confianza al trabajo que ha realizado.

**Sr. Rodríguez (C. J.).** — Muchas gracias.

**Sr. Méndez Casariego.** — Pero no porque tenga un voto consciente que dar; no sé lo que voto o voy a votar: no hay un despacho impreso, no conocemos la disidencia sino por la relación que acaba de hacer su miembro disidente y sin que argumentos de esa naturaleza hayan podido ser pesados, computados y calibrados.

Por esa razón es que pido, sin perjuicio para nadie, con beneficio para las clases que están interesadas en esto, que esta ley se deje para la próxima sesión, para que la votemos con el despacho impreso por delante y podamos decir en conciencia que es lo que mejor conviene.

Nada más.

**Sr. Presidente** (Sánchez de Bustamante). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Avellaneda (N. A.)** — Yo creo, señor presidente, que este importante

proyecto de jubilaciones de empleados y obreros de servicios públicos, tan justamente anhelada, pues viene a amparar a los que cumpliendo con la ley ineludible del trabajo — porque es la ley de la vida — agotaron sus mejores energías durante largos años consagrados a la dura labor en la obra común, es indispensable, es urgente que se convierta en ley. No podemos demorarla más; ya han transcurrido varios períodos desde que el ex diputado Veyga presentara a la consideración de la cámara este proyecto de previsión social, de reparación y de justicia. No ha habido motivos fundados para su postergación, que ya se va haciendo muy larga.

Es por eso, señor presidente, que yo he de votar el proyecto venido en revisión del senado, no obstante que no estoy de acuerdo con algunas de sus modificaciones. Pero, como lo decía el señor miembro informante de la mayoría de la comisión de legislación del trabajo, esas reformas, en su mayor parte, no son fundamentales, y las que lo son están en concordancia con la ley de jubilaciones y pensiones ferroviarias, que es una ley semejante a la que tratamos de sancionar.

Por otra parte, el señor diputado Bunge, con la habilidad que le es característica y a pesar de su erudición que en esta materia es notoria, olvidaba mencionar que no son tan grandes ni tales los peligros que él enunciaba en caso de que esta ley social resulte incompleta; porque ella misma ha previsto la situación. El artículo 59 — permítanme los señores diputados que lo lea, porque es sumamente trascendental para probar lo infundado de los temores del diputado a que me he referido — dice que la caja, dentro de los tres primeros años de su funcionamiento, deberá hacer un estudio matemático sobre las bases de la técnica actuarial, cuyos resultados elevará al poder ejecutivo, proponiéndole las modificaciones a esa ley que creyera convenientes, porque se ha dado cuenta que después de alguna experimentación, ella será susceptible de enmienda.

Es por eso que sin vacilaciones, y convencido de que lo hago conscientemente, no invito a los señores diputados radicales, como lo hacía el señor diputado doctor Frugoni, sino a todos los representantes del pueblo argentino, a que votemos esta ley.

**Sr. Méndez Casariego.** — En estos asuntos no hay radicales ni conservadores.

**Sr. Avellaneda (N. A.)** — Precisamente, por eso hago el llamado a todos los señores diputados.

No quiero prolongar este debate y prefiero predicar con el ejemplo, siendo breve. Voy, simplemente, a recordar una de las consideraciones que expuse como miembro informante de la comisión de legislación en el año 1919, sobre este oportuno proyecto. Yo decía que cuando sancionáramos esta ley de palpitante actualidad y de tanta conveniencia y justicia indiscutible, habríamos dado un paso hacia el mejoramiento de nuestra legislación social.

Señor presidente: La idea de la reforma social, que se difunde por todas partes como un signo de los tiempos, debe continuar avanzando en este país. La República Argentina, en su marcha ascendente e inteligente hacia el progreso, tiene que ponerse en la corriente de las ideas y de los hechos que gobiernan al mundo en este momento. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

**Sr. Anastasi.** — Pido la palabra.

No voy a votar la moción de aplazamiento, porque sé lo que significa la postergación en materia de leyes obreras.

En el período parlamentario del año pasado, los despachos de la comisión de legislación del trabajo y de la comisión de negocios extranjeros sobre tratados de reciprocidad en materia de accidentes del trabajo estuvieron esperando turno hasta el 30 de septiembre...

**Sr. Méndez Casariego.** — ¿Me permite?

Es posible que ese sea el resultado, pero quiero que respete mi propósito: mi propósito no es ese.

**Sr. Anastasi.** — Indudablemente; ha-

go justicia a los propósitos del señor diputado.

Hemos clausurado el año 1920 sin una sola ley de justicia social. En ese sentido, la actividad legislativa fué mucho más intensa de 1916 a 1918, en que el parlamento argentino levantó su autoridad moral sancionando las grandes leyes de accidentes del trabajo, de trabajo a domicilio, de jubilación de ferroviarios y de casas baratas.

Para votar con conciencia, yo no creo que necesitemos ni el despacho impreso ni la información de los pequeños pleitos que algún partido político puede tener con determinada empresa de tranvías, ni siquiera la lectura de la recopilación de la legislación del soviét sobre esta materia. Nos basta con nuestros antecedentes nacionales, donde los señores diputados de todos los sectores políticos, lo mismo que los señores senadores, han demostrado una información de que me enorgullezco.

Digo que no necesitamos el despacho impreso, porque en esta banca existen todos los elementos que cualquiera de los señores diputados ha podido proporcionarse recurriendo simplemente a la colección del Diario de Sesiones. En efecto, el despacho de la mayoría es simplemente la sanción del honorable senado, sanción que se produjo en las sesiones del 27 de septiembre de 1920, donde, dicho sea de paso, la discusión fué llena de interés y de luz. La disidencia del señor diputado por la capital doctor Bunge es simplemente la reproducción de la sanción de la cámara de diputados en 1919. Se encuentran estos antecedentes en el tomo VI del Diario de Sesiones de esta honorable cámara. Además, en 1917, ya el diputado de Veyga reprodujo el proyecto que había presentado en 1915. Por otra parte, esta ley no es una ley de originalidad, es simplemente una aplicación de los principios que han tenido en cuenta los legisladores argentinos para sancionar la ley 10.650, ley que en la práctica ha resultado excelente, ha llenado, por así decirlo, de satisfacción a una parte muy respetable de los trabajadores de la república y ha disipado los

temores que algunos doctores en matemáticas abrigan cuando se sancionó.

Esta ley, por otra parte, no ofrece peligro alguno. Deben saber los señores diputados que las jubilaciones y pensiones sólo empezarán a percibirse después de tres años de su sanción y con ese motivo se pueden fácilmente adoptar las medidas que exigiere o resultaren de la práctica. A esta reforma han de contribuir no sólo los legisladores, sino los mismos obreros, porque yo tengo entendido que a ellos no les puede interesar una caja en quiebra sino por el contrario un organismo que les pueda asegurar el amparo y el reposo para los días de ancianidad.

Las observaciones que se han oído del señor diputado por la capital son en gran parte las que en el honorable senado hiciera el señor senador Linares y a las cuales el senador Gallo, presidente de la comisión respectiva, presidente de esa comisión que hizo ese estudio tan detenido y metódico del proyecto, decía:

“No participo del pesimismo tan acentuado que inspira la palabra del señor senador por Salta. Suponiendo que a base de una serie de leyes semejantes la nación haya de cargar con el saldo cuantioso procedente de las diversas cajas de jubilaciones y pensiones que se creen, no significa por ello demandar al estado un esfuerzo excesivo en relación a sus fuerzas. No participo de ese pesimismo porque desde luego no creo que estos desequilibrios se presenten o asuman las proporciones que el señor senador por Salta teme, para gravitar exclusivamente sobre el estado, porque, al contrario de lo que piensa, como lo decía hace un momento, soy un convencido de que si se evidenciara su situación de desequilibrio entre los ingresos y las erogaciones de la caja de tal magnitud que el aporte de la nación para cubrir los saldos que produzca resultaran superiores o excesivos en relación a los recursos mismos de la nación, habría que contar con la colaboración de los mismos beneficiados para consagrar las reformas indicadas por la experiencia como necesarias.”

Y terminaba el senador Gallo con este párrafo que voy a leer porque servirá para que los señores diputados voten con conciencia esta ley reclamada por 22.000 trabajadores de la república. El señor senador Gallo decía:

Estas leyes no crean situaciones definitivas e irrevocables; pueden ser modificadas en favor o en contra de los derechos que ellas acuerdan. Ello ha ocurrido en todas partes y es inevitable. Para alcanzar esa solución, que ha de tender a afianzar el equilibrio y la seguridad de la caja, lo razonable es contar, no con la oposición o protesta de los que son beneficiados por la ley, sino al contrario, con el concurso de ellos.

Por último, señores legisladores, me parece que en materia de justicia social, donde estamos tan evidentemente en retraso, no digo con respecto a los países europeos sino ya con respecto a los países americanos, como el Perú por ejemplo, en esta materia es bueno repetir una vez el antiguo adagio: lo mejor es enemigo de lo bueno. Sancionemos esta ley y el tiempo nos ayudará a corregir sus errores.

Nada más.

**Sr. López Anaut.** — Pido la palabra.

Voy a ocuparme brevemente de este asunto. Si tomo la palabra es más que nada para fundar mi voto en contra de la moción de aplazamiento.

El señor diputado por Entre Ríos funda su pedido, en primer lugar, en la disidencia del miembro informante de la minoría de la comisión y le da a esa disidencia una importancia considerable que en realidad no tiene, ya que el señor diputado Bunge dijo a propósito de este proyecto, en la sesión del 14 de marzo de 1919, estas palabras que demuestran que no debe ser tan grave esa disidencia: "Aceptamos el seguro parcial de un grupo reducido de trabajadores, porque su sanción no tardará en imponer de hecho el seguro social."

**Sr. Bunge.** — Acabo de decirlo.

**Sr. López Anaut.** — Es decir, que lo llevé especialmente al señor diputado Bunge a votar ese proyecto, su anhelo y su esperanza de que se votara al-

guna vez el seguro nacional; de manera que no le molestará en ninguna forma que se vote ahora esto.

**Sr. Bunge.** — Por eso voy a votar en general.

**Sr. López Anaut.** — Al señor diputado autor de la moción de aplazamiento le llamaba la atención la forma en que el senado proponía la formación de la caja, y consideraba que el asunto era grave; pero si el senado ha mejorado considerablemente la manera de formación de la caja y la ha mejorado no a costa de los trabajadores sino a costa de las mismas empresas, quiere decir que si mañana las empresas, para cubrir los gastos, solicitan aumento de tarifas, ese aumento no le será acordado hasta que una previa inspección de los libros no demuestre que tienen pérdidas.

**Sr. Martínez (J. H.)** — ¿Entonces, el artículo 58 no tiene ninguna cláusula de carácter impositivo, en el sentido de que las empresas puedan aumentar las tarifas?

**Sr. López Anaut.** — El señor diputado no ha leído la última parte que dice que las empresas podrán aumentar las tarifas con intervención de las autoridades, es decir, que ellas solicitarán el aumento y los poderes públicos se lo concederán o no según resulte de la inspección de los libros.

**Sr. Martínez (J. H.)** — Es un artículo inútil.

**Sr. López Anaut.** — No, señor diputado: es un artículo necesario y previsor.

Además, el señor diputado Méndez Casariego se funda en el hecho de que no hay un despacho impreso. Es un argumento fácil de destruir porque el señor diputado ha votado este proyecto cuando se sancionó en esta cámara; ha votado nada menos que 25 artículos y los artículos que se han agregado en la sanción del senado no tienen mayor importancia.

**Sr. Méndez Casariego.** — ¿Cuántos artículos tiene la ley?

**Sr. López Anaut.** — Tiene 36 artículos y yo puedo adelantarle al señor diputado que los va a votar todos.

**Sr. Méndez Casariego.** — Es probable.

**Sr. López Anaut.** — Además, el señor diputado Méndez Casariego ha votado 40 artículos de la ley de pensiones ferroviarias que los va a volver a votar ahora en este proyecto.

**Sr. Méndez Casariego.** — No era diputado.

**Sr. López Anaut.** — Hay tres puntos importantes respecto de los cuales quizá el señor diputado Méndez Casariego y los demás señores diputados no se encuentran en condiciones de votar y que son los siguientes: extender los beneficios de esta ley a todo el país, cosa que no se puede discutir por lo necesario y conveniente que es; segundo punto, el aporte del estado: esto se resuelve a su sola presentación; cuarto, la facultad de aumentar las tarifas, que no va a depender de las empresas sino de las necesidades reconocidas por el poder ejecutivo.

Nada más.

**Sr. Méndez Casariego.** — Hay una situación psicológica que se puede traducir con esta expresión: tribulaciones de espíritu. Yo estoy en una situación de tribulación; no sé lo que voy a votar, no se me da tiempo para resolver si debo votar en un sentido o en otro.

**Sr. López Anaut.** — Se le explicará al señor diputado a medida que se tratan los artículos.

**Sr. Méndez Casariego.** — No, señor diputado. No es práctica parlamentaria que se voten los despachos de comisión con disidencias sin estar impresos.

**Sr. Presidente** (Sánchez de Bustamante). — En consideración la moción, que es previa.

—Después de unos momentos de espera para formar quórum:

**Sr. Presidente** (Sánchez de Bustamante). — Se va a votar la moción del señor diputado por Entre Ríos, si se aplaza la consideración del asunto en debate hasta la próxima sesión, im-

miéndose mientras tanto el despacho correspondiente.

—Resulta negativa.

**Sr. Presidente** (Sánchez de Bustamante). — Se va a votar en general el despacho de la comisión.

—Es aprobado. (*Aplausos en la barra*).

**Sr. Presidente** (Sánchez de Bustamante). — En consideración el artículo 1.º.

—Se lee el artículo 1.º.

**Sr. del Valle.** — Haría indicación para que artículo no observado se diera por aprobado.

**Sr. Presidente** (Sánchez de Bustamante). — Si no hay oposición así se hará.

**Sr. Bunge.** — Desgraciadamente, se hace esta discusión con tal apremio, que no puedo pretender perturbar la sanción pidiendo que se lean al mismo tiempo los artículos divergentes, porque ni siquiera he tenido tiempo para hacer ese paralelo entre los artículos convergentes y los que divergen en las dos sanciones.

**Sr. del Valle.** — No me opongo a que se lean.

**Sr. Bunge.** — Como se trata de una oposición entre ambos articulados, me parece conveniente que se resuelva la cuestión votando en cada cosa.

**Sr. del Valle.** — Mi moción no tiene más alcance que evitar la pérdida de tiempo en votaciones inútiles cuando no hay observación.

**Sr. Molina.** — Más tiempo perdemos en discutir.

**Sr. Presidente** (Sánchez de Bustamante). — Como hay oposición se votarán los artículos.

En consideración el artículo 1.º.

—Se vota y resulta afirmativa.

—En discusión el artículo 2.º.

**Sr. Anastasi.** — Este es un artículo nuevo.

**Sr. Rodríguez (C. J.)** — Pido la palabra.

Como este es uno de los artículos nuevos que no figuraban en el proyecto primitivo sancionado por la cámara ni existe en la ley de ferroviarios...

**Sr. Peña.** — Existe en la ley de ferroviarios.

**Sr. Rodríguez (C. J.)** — Muy bien. Ya he dado las razones por las cuales convendría que disposiciones de esta naturaleza sean generales para las empresas similares de la nación.

—Se vota el artículo y es aprobado.

—En discusión el artículo 3.º.

**Sr. Agüero Vera.** — Pido la palabra.

Hay que hacer una rectificación numérica. Se ha citado el artículo 28, debiendo ser el 21.

**Sr. López Anaut.** — Era un error de imprenta que ha sido salvado en la lectura.

**Sr. Fox.** — Puede darse lectura del artículo a que hace referencia el que está en discusión:

—Se lee:

Los empleados u obreros que no tuvieren familia que sostener, que hubieren llenado las condiciones exigidas para tener derecho a ser jubilados, y que antes de serlo fueran destituidos por mal desempeño de los deberes de su cargo o por abuso de bebidas alcohólicas durante el ejercicio del mismo o condenados por sentencia judicial por delito que haya merecido pena de presidio o de penitenciaría, no serán jubilados, pero se les devolverá el importe de los descuentos hechos a sus sueldos siempre que no hubiere lugar a aplicarlos a la indemnización del daño civil causado.

En caso de tener familia que sostener, no se devolverá al penado el importe del descuento hecho a su sueldo, pero gozarán de la pensión que corresponda a la jubilación perdida las personas que tengan derecho a ella con arreglo a la ley.

—Sin observación se votan y aprueban los artículos 3.º y 4.º.

—En discusión el artículo 5.º.

**Sr. Bunge.** — Pido la palabra.

Para que los señores diputados puedan darse cuenta, siquiera sea someramente, del alcance de este artículo, debo hacer notar que esta caja queda ligada por vasos comunicantes con cajas que están en plena bancarrota, como la nacional de jubilaciones y pensiones y la municipal; que se incorpora a los beneficios de la caja de jubilaciones de empleados de servicios públicos a los empleados nacionales y municipales que pasaran a serlo de las empresas de servicios públicos, e inversamente; que se trata, por lo tanto, de una disposición que beneficia exclusivamente a un limitado número de personas, y para ello introduce en esta caja de jubilaciones de obreros todos los vicios orgánicos de las cajas de la ley nacional y de la ordenanza municipal.

**Sr. Bermúdez.** — Pido la palabra.

No le extraña a la comisión que yo le haga algunas preguntas respecto de este asunto, porque una cuestión tan seria y fundamental, como es la legislación sobre jubilaciones y pensiones del gremio de tranviarios y otros, la cámara la está tratando sin conocimiento alguno.

La comisión se ha expedido hoy, y ningún miembro de la cámara tiene por delante ni siquiera el proyecto venido en revisión del senado. Realmente es curiosa esta forma de tratar un asunto de tanta importancia. Por eso, como decía, no debe extrañar la comisión que se le formulen algunas preguntas.

¿Ha previsto la comisión la financiación, en la nueva caja que se crea por esta ley, de la jubilación de aquellos empleados, obreros o funcionarios que están ahora acogidos a otras leyes, a que se acaba de referir el señor diputado Bunge, como la caja nacional de jubilaciones y pensiones y la caja de pensiones y retiros de la municipalidad? ¿Se ha previsto la financiación de los recursos que estos empleados deben aportar a la nueva caja? Yo ignoro la forma en que se resuelve este problema en el proyecto que estamos considerando.

El artículo establece, según ha leído

el señor secretario, que todos los viejos funcionarios, empleados y obreros que han estado acogidos a otras leyes, van a tener derecho a acogerse a los beneficios de esta ley. Pero ¿cómo se ha resuelto el problema de los recursos que deben aportar al fondo de jubilaciones de esta nueva caja?

**Sr. Rodríguez (C. J.)** — Pido la palabra.

La comisión lamenta que por resolución de la cámara no se haya podido imprimir el despacho para que pueda estar a la vista de los señores diputados.

Contestando a la pregunta del señor diputado por Corrientes, quien se ha hecho eco de la observación formulada por el señor diputado por la capital, debo manifestar que, efectivamente, esta disposición significa una innovación de trascendencia en el régimen de nuestras jubilaciones y pensiones. Pero, por lo mismo que es de importancia, ha sido suficientemente meditada. Ella se inspira desde luego en un concepto de alta justicia.

Por otra parte, tiene todos los recursos financieros que son necesarios para sufragarla.

Hasta hoy los empleados ferrocarrileros que sin haber servido durante treinta años en las condiciones que marca la ley salían de las respectivas administraciones, no tenían derecho a ninguna compensación de jubilación o de pensión cuando voluntariamente o por otras circunstancias abandonaban el servicio.

Esta situación, contemplada desde el punto de vista de los conceptos corrientes que han informado las leyes de jubilaciones y pensiones nacionales y de ferroviarios, parece que fuera una injusticia o algo que no tuviera explicación; pero si aquellas leyes no han podido atender a esta situación de injusticia que se le creaba al empleado que, no habiendo llegado a cumplir el tiempo establecido, hubiera sin embargo estado largo tiempo al servicio de las empresas, no es una razón para que hoy, al tratarse esta ley, no se considere y se ampare un legítimo derecho que nace del trabajo continuado y no

retribuido íntegramente con el sueldo o salario que se abona mensualmente. La industria consume toda la vida útil de un hombre; paga durante esos treinta años un salario; y luego sin socorro entrega al obrero libre a la lucha por la vida, en plena vejez, agotada su fuerza de trabajo. Contra este viejo concepto del salario, la economía moderna enseña otro, que consiste en reconocer como noción verdadera la retribución del trabajo que sea suficiente a sostener la vida durante toda su trayectoria, en la edad viril del trabajo y en la vejez del descanso.

El salario integral hoy día, a cargo de la industria que emplea al trabajador, comprende el sueldo actual, o salario propiamente dicho, y el sueldo diferido, o sea jubilación y pensión.

Tal es el concepto económico moderno, que inspira esta innovación.

De manera que en este texto, que se incorpora como una novedad a nuestra legislación, se acepta la doctrina económica de que el empleado no recibe toda la retribución que su puesto de trabajo merece con el estipendio mensual; sino que en el mañana de su vejez o invalidez, tanto el estado como los empresarios, le han de socorrer con la riqueza que ha creado para sus empleadores, a cuyo servicio destinó y consumió toda su energía vital como asalariado.

Resulta así entonces que, si hay empleados que no habiendo cumplido con todo el término que fijan las leyes vigentes no pueden obtener la jubilación a los treinta, y siendo eso una injusticia que priva de legítimos recursos al obrero, ha llegado la hora de amparar esa situación con el texto de la ley.

Esto desde el punto de vista de la justicia.

He aquí por qué el artículo 4.º, al introducir este concepto moderno, abre una corriente de reciprocidad entre las cajas de retiros que amparan situaciones económicas de varios gremios de asalariados. Así como la caja de jubilaciones y pensiones de tranviarios habrá de jubilar y pensionar aquellos que en otros tiempos hubieran



prestado servicios al estado o los hubieran prestado a la industria ferroviaria, así también el estado podrá reconocer los servicios prestados en estos otros institutos de casi servicios públicos, como son las empresas ferroviarias y las empresas tranviarias, etc.

Este concepto viene a establecer esa reciprocidad entre las cajas parciales de retiro, lo que no quiere decir sino que es el primer paso para establecer la solidaridad, y la correlación que mañana nos conducirá al seguro nacional. Es, pues, un paso dado en el camino de una de las más grandes iniciativas de política social.

En cuanto a la financiación, debo recordar que el artículo 54 establece que tanto una caja como otra habrán de hacer los respectivos aportes, según que sea el empleado nacional que haya venido a completar sus servicios en el gremio de los tranviarios, en cuyo caso deberá ser retribuido por la respectiva caja nacional a la caja de tranviarios, o por la de tranviarios a la nacional, en el caso contrario.

**Sr. Bermúdez.** — Y si las cajas nacionales que, como lo acaba de manifestar el señor diputado Bunge están en plena bancarrota, llegan dentro de poco tiempo a la liquidación final, ¿quién reintegra a la nueva caja los fondos con que estos empleados han contribuido? ¿De dónde van a sacar ellas las sumas que deberán aportar a este fondo de jubilaciones y pensiones?

**Sr. Molina.** — ¿Me permite el señor diputado una ligera interrupción?

Se está hablando de la quiebra de la caja nacional de jubilaciones y pensiones, y yo considero que eso no es exacto. Esa caja marcha perfectamente bien, dadas las disposiciones de la comisión de presupuesto consignadas en los artículos 18 y 19, una extendiendo a cinco años el término medio de los sueldos, y otra obligando al reembolso para los que no hubieran contribuido a la caja. Ese sólo artículo producirá 20.000.000 de pesos y del informe del poder ejecutivo, que el señor diputado debe conocer, porque entiendo que lo ha estudiado, pues lo ha

llevado especialmente para estudiarlo...

**Sr. Bermúdez.** — Con todo detenimiento.

**Sr. Molina.** — ...resulta que la caja no está en quiebra.

**Sr. Bermúdez.** — Le voy a dar, como única respuesta, este dato. Al 31 de diciembre de 1918, la caja tenía un déficit de 76 millones de pesos y al 31 de diciembre de 1919 tenía un déficit de 94 millones de pesos. En un año se ha aumentado el déficit en 18 millones de pesos. Tal es la prosperidad de la caja.

**Sr. Molina.** — Eso no dice el informe oficial.

**Sr. Bermúdez.** — Resulta que la caja va en plena y galopante bancarrota. ¡En 18 millones ha aumentado el déficit de un año para otro! Ahí están los datos de la memoria de la caja.

**Sr. Molina.** — Y, aun siendo exacto, ¿quién le impediría al parlamento ir modificando la legislación, y no dejarla estacionaria, como lo ha hecho? En todas partes del mundo se dictan leyes, que se van perfeccionando con otras leyes subsiguientes.

**Sr. Bermúdez.** — Es lo que propongo...

**Sr. Molina.** — No podemos pretender ir perfeccionando desde el primer momento, sin conocer su aplicación en la práctica.

**Sr. Bermúdez.** — Es lo que he propuesto cuando he presentado el amplio proyecto de reformas, para evitar, no la bancarrota en que está la caja, sino la liquidación definitiva.

**Sr. Molina.** — Quiere decir que no hay que alarmarse demasiado por eso.

**Sr. Bermúdez.** — Me pongo en el caso hipotético para mí. Pregunto si todos estos empleados, obreros y funcionarios que por el artículo que se acaba de leer van a pasar a usufructuar de los beneficios de esta ley de jubilación de tranviarios que se está discutiendo, si cuando ellos pasen, aquellas instituciones a las que estuvieron acogidos llegaran a la bancarrota o la liquidación, porque el parlamento o el gobierno no hubiera tomado las medidas ne-

cesarias para evitarlo, ¿quién va a responder a esta caja de los aportes que ellos debían llevar? ¿Está previsto el caso?

**Sr. Anastasi.** — ¿Me permite una interrupción?...

Hay un antecedente en la ley 10.350 de jubilaciones de ferroviarios, que dice: "A los actuales empleados y obreros ferroviarios se les computarán los servicios prestados con anterioridad en las distintas ramas de la administración nacional."

**Sr. Bermúdez.** — Permítame el señor diputado...

Yo no discuto la justicia de que se les incorpore y reconozca los servicios. Estoy hablando de la faz financiera del asunto. Me he explicado claramente. Estoy conforme con las doctrinas sostenidas por el señor miembro informante de la comisión, de que es una manera de solidarizar a todos los gremios obreros y trabajadores del país y que será conveniente unificar en absoluto las leyes de jubilaciones y retiros; pero no me refiero a esa cuestión: me refiero a la parte financiera. ¿Cómo se va a hacer frente al gasto que representará la incorporación a esta caja de millares y millares de obreros que han prestado servicios, pero que hoy están bajo el amparo de otras leyes, si estas llegan a desaparecer? ¿Cómo se ha previsto esta situación en la ley? Esa es mi pregunta concreta.

**Sr. Molina.** — Cuando se produzcan los hechos veremos y modificaremos.

**Sr. Méndez Casariego.** — No se ha previsto, pero se arregla con una nueva ley después. Las leyes se pueden dictar aunque sean malas, porque siempre hay tiempo de votar otras para corregirlas...

**Sr. Bermúdez.** — No pierda de vista la honorable cámara este principio fundamental: la financiación razonable y previsora de estas instituciones es la única base cierta y segura con que se puede contar para su prosperidad y para que cumplan su misión social. Es ese el mal de nuestra caja de jubilaciones y pensiones nacionales; ella ha tenido originariamente el mal de su fi-

nanziación, inconveniente, irregular e insuficiente, y por eso la caja está en ese estado. Mi propósito no es, como bien se comprenderá, sino el de prever el caso y dar a esta nueva institución las bases sólidas financieras que se necesitan para que realmente sea útil, prospere y no llegue a una situación irregular.

**Sr. Anastasi.** — Pero esta caja no tiene los vicios originarios de la caja nacional de jubilaciones y pensiones.

**Sr. Bermúdez.** — Me limito a preguntar, porque he declarado que no conozco absolutamente el proyecto. Pregunto cómo está previsto el caso.

**Sr. Rodríguez (C. J.)** — El señor diputado por la capital, doctor Molina, ya ha anticipado las razones por las cuales hay que desechar todo pesimismo respecto del porvenir de la caja de jubilaciones y pensiones nacionales...

**Sr. Bermúdez.** — Está muy equivocado el señor diputado. Ya le demostraré cuando se discuta ese asunto, cómo tiene entradas insignificantes con relación a las necesidades de la caja para hacer frente a sus compromisos.

**Sr. Molina.** — No lo va a demostrar el señor diputado, porque está completamente equivocado.

**Sr. Bermúdez.** — La primera base esencial que se requerirá, será el aumento considerable del aporte. Ahí está la base esencial.

**Sr. Molina.** — No lo va a demostrar el señor diputado.

**Sr. Rodríguez (C. J.)**.—Precisamente, señor presidente, ese era mi argumento: la crisis que se nota en la estabilidad financiera de la caja de jubilaciones y pensiones nacionales no es simplemente por razón de la falla del mecanismo matemático-financiero; hoy día es una bancarrota de conceptos económicos, y forzosamente habrá que modificar toda la organización de la caja de jubilaciones y pensiones a base de una renovación de los conceptos científicos más aceptados en esa materia. Por eso yo, sin entrar en una discusión, afirmo que sin desdeñar desde luego el ahorro obligatorio que se le impone a los empleados, del cinco por ciento, es

el estado únicamente el que debe proveer a la situación de los empleados agotados en sus vitales energías durante sus treinta años de servicios. De manera que él es el único deudor, el único que ha debido contribuir desde el principio y el único que tendrá que contribuir al fin.

**Sr. Bermúdez.** — En eso, el señor diputado está de acuerdo con mi proyecto, porque mi proyecto establece la contribución del fisco.

**Sr. Rodríguez (C. J.).** — Por otra parte, no tengo necesidad de añadir mayores argumentos, para no prolongar este debate.

**Sr. Peña.** — Yo desearía que la comisión me diera este dato, que lo solicito de la gentileza del señor diputado, por no tener por delante el despacho impreso que se está discutiendo: los aportes representan el cuánto por ciento anual del total de los sueldos del personal que va a gozar de los beneficios, para los fines de poder determinar la financiación y poder contribuir en algo a aclarar el problema planteado por el señor diputado.

**Sr. Rodríguez (C. J.)** — El cálculo no excede del 15 por ciento.

**Sr. Peña.** — Aquí también se puede resolver la cuestión en que ha intervenido el señor diputado Molina.

El 15 por ciento, en un país como este, en que todavía tenemos mucho la movilidad del personal, pues no hay la radicación que existe en los países extranjeros — que nacen y mueren empleados — el 15 por ciento, digo, constituye una garantía bastante sólida en nuestro país, de que una caja de pensiones y jubilaciones pueda dar los resultados esperados. Allí precisamente está la gran falla de la caja nacional de jubilaciones y pensiones.

**Sr. Rodríguez (C. J.)** — Será la falla de la caja. Habrá que reformarla.

**Sr. Peña.** — ¿Me consiente que le dé algún antecedente?

**Sr. Rodríguez (C. J.)** — Es una brevísima interrupción...

**Sr. Peña.** — La caja nacional de jubilaciones sólo vive con el aporte del cinco por ciento del total de los suel-

dos. De tal modo que aunque el señor presidente de la comisión de presupuestos, con toda la autoridad que le reconocemos, nos diga que esa caja no va a la ruina, yo puedo afirmar, a pesar de los puntalitos que le ha puesto, que fatalmente tiene que ir con ese aporte.

Como acaba de manifestar el señor diputado Bermúdez, estas otras cajas, si llevan un 15 por ciento, difícilmente se verán en la situación afligente en que se encuentra la caja nacional de pensiones.

La cuestión que propone el señor diputado Bermúdez me parece que es esta: ¿quién va a hacer el pago de las pensiones en los casos de servicios mixtos, es decir, en la administración nacional y en empresas tranviarias? Se trata de un modesto empleado de la nación, que en los dos o tres últimos años va a una empresa tranviaria. Puede ocurrir que de un sueldo de 150 pesos pase a uno de 500. Se hace la determinación del promedio que le corresponde para su jubilación por años de servicios, computando los nacionales y los de la empresa, y se encuentra con que hay que pagarle 350 pesos mensuales de jubilación. ¿Quién paga eso? ¿Lo paga exclusivamente la caja correspondiente al último empleo? ¿Es una cuestión de mucha importancia.

**Sr. Rodríguez (C. J.)** — Si me permite, voy a contestarle.

Esa jubilación de ese obrero por la caja de la última empresa la pagan las otras cajas de las empresas, o del estado, según haya prestado sus servicios, y proporcionalmente al tiempo que hubiere servido en las distintas empresas o en la administración. Por eso el artículo 54...

**Sr. Peña.** — Pero, ¿quién le entrega la jubilación?

**Sr. Rodríguez (C. J.)** — La caja.

**Sr. Peña.** — ¿De manera que después tiene que repetir de las otras? Ese es el problema planteado por el señor diputado.

**Sr. Rodríguez (C. J.)** — Está resuelto por el artículo 55, que dice: En los casos del artículo anterior, esta caja tranviaria reclamará respectivamente

de la caja nacional de jubilaciones y pensiones civiles, de la caja municipal de jubilaciones y retiros de la capital y de la caja de ferroviarios, etc., las sumas que proporcionalmente correspondan en cada caso.

**Sr. Peña.** — Entonces las fallas de las otras cajas van a pesar sobre la caja de tranviarios.

**Sr. Rodríguez (C. J.)** — No, señor; cada caja responderá en proporción del tiempo de servicios.

**Sr. Peña.** — No podrán responder, y la que va a sufrir es la caja de tranviarios.

**Sr. Rodríguez (C. J.)** — Ella tiene que reclamar.

**Sr. Bermúdez.** — ¿Y si las cajas no pueden pagar? Le voy a citar el caso concreto.

Esta ley establece que los empleados de la municipalidad de la capital pueden acogerse a ella. Es sabido que la caja de pensiones y retiros de la municipalidad está también en quiebra, y si el concejo deliberante no modifica esa ordenanza estableciendo bases financieras ciertas para restablecer su equilibrio, esa caja desaparecerá. Entonces, ¿quién va a pagar a la caja de tranviarios los aportes que correspondan a esos empleados a quienes se reconocen sus servicios?

**Sr. Rodríguez (C. J.)** — La hipótesis es improbable. Si se trata de la caja nacional de pensiones, ya he dicho que el estado es el único responsable. De manera que mal se puede admitir que vaya a quebrar. Si se trata de la caja municipal, otro poder público, no es concebible que frente a la deuda sagrada que tiene, haya alguna vez de desecharla o desconocerla. De manera que tampoco la caja municipal puede quebrar, pues tendría que cumplir con su deber para con sus empleados.

**Sr. Bermúdez.** — Es un profundo error de concepto en el que incurre el señor diputado. Ni el fisco de la nación, ni el poder ejecutivo, ni la municipalidad, son deudores de la caja, porque por la ley no están obligados a contribuir con nada. Ahora, si el

señor diputado establece en la ley que en el caso de que esas instituciones no puedan pagar a la caja de tranviarios lo que corresponde a los empleados que se incorporen al régimen de la nueva ley, lo pagará el gobierno, acepto. Establézcase claramente que el gobierno de la nación será el responsable y lo pagará. No quiero que se exponga a esa institución a una bancarrota por esa circunstancia.

En resumen, saco en conclusión que la comisión no ha dicho de qué manera se explica este caso grave y serio para las finanzas de la institución.

**Sr. Rodríguez (C. J.)** — Yo creo que la explicación que he dado ha sido clara.

La comisión entiende que podrá ser salvada esa situación improbable, y si el señor diputado u otros tiene un pensamiento diferente, votarán en consecuencia, pero para nosotros la estabilidad financiera de la caja de tranviarios, que en este momento se considera como cualquier otra, en ningún momento podrá estar en peligro, no sólo por las consideraciones de justicia que he aducido, sino porque seguramente antes de poco tiempo estará sancionado el seguro obrero nacional y habrán desaparecido así estas consideraciones. Y debo advertir que tanto esta caja como la de ferroviarios ha de demorar seguramente un período de quince o veinte años antes que pueda encontrarse en peligro, y para ese tiempo se habrán tomado, no sólo estas medidas que se sugieren, sino algunas más trascendentales que aseguren su estabilidad.

**Sr. Bermúdez.** — Mientras tanto se dictará una ley incompleta.

**Sr. Bunge.** — Pido la palabra.

Deseo contribuir a aclarar la situación que crea este artículo.

Puede ocurrir el caso, o bien de obreros de las empresas de servicios públicos que pasen a ser empleados municipales o nacionales y que por lo tanto se incorporarán a las respectivas cajas, o el caso de empleados nacionales o municipales que pasen a serlo de algunas empresas de servicios pú-

blicos y que, entonces, formarán parte de la caja que instituye esta ley.

En el caso de empleados tranviarios o de las otras empresas de servicios públicos que pasen a ser empleados municipales o nacionales, ¿cuál sería el aporte que la caja de jubilaciones de esos empleados debería transferir a la caja municipal o nacional? En la actualidad, ni un centavo: porque esta ley reconoce los servicios que han prestado sin haber contribuido esos empleados durante todo el tiempo anterior a su vigencia en que han trabajado.

Por lo tanto, durante los primeros 30 años de vigencia de la ley, los aportes que deban llevar los obreros de empresas de servicios públicos de la capital que pasen a ser empleados municipales o nacionales, serán durante los primeros años una fracción mínima de aquellos que prevé la ley. En el caso inverso, de empleados municipales que pasen a ser empleados de empresas de servicios públicos, la caja municipal no deberá aportar a la caja de jubilación de servicios públicos sino el siete al diez por ciento del limitado número de años en que los empleados municipales han contribuido con ese tanto por ciento. Ahora, en el caso de la caja nacional de jubilaciones, no deberá contribuir sino un cinco por ciento, capitalizado con los intereses que hayan podido acumularse. Será, pues, un aporte mucho menor que el que la ley calcula como necesario para cubrir el costo de las jubilaciones, y será también infiltrar en esta nueva caja para obreros en su mayoría, los graves vicios orgánicos de que adolecen las cajas municipal y nacional de jubilaciones. No será, en consecuencia, una preparación al sistema de seguro social, que jamás comprende a los funcionarios públicos, sino pervertir este embrión muy relativo y deficiente del seguro de trabajadores con todos los vicios de los sistemas de jubilación de empleados públicos vigentes entre nosotros.

**Sr. Bermúdez.** — Ese es el objeto y el aspecto que tiene mi pregunta. Ahora, en el supuesto de que estas ca-

jas pudieran entregar a la nueva institución los aportes llevados a ella por los empleados que habiendo prestado servicios públicos parciales entrasen a formar parte de la misma, nunca podrán llevar el aporte total que esta ley establece; porque si como lo manifiesta el señor miembro informante de la comisión, equivale el aporte a un quince por ciento, ¿cómo van a llevar al fondo común de las pensiones que van a estar sometidos al régimen de esta ley, aquellas otras instituciones de las que se desprendería un grupo de empleados para incorporarse a ella? Esos empleados no podrían llevar sino lo aportado a las respectivas instituciones a que pertenecían; es decir, el diez por ciento en la caja municipal, el cinco por ciento en la caja de jubilaciones y pensiones civiles. Quiere decir que quedarían estos caballeros en una condición de superioridad y privilegio con respecto a los demás que van a aportar desde el principio el quince por ciento. Se producirá entonces un desequilibrio en la institución, porque unos habrán aportado el cinco, otros el diez y otros el quince por ciento para gozar de los mismos beneficios. Esa es la más grande injusticia y la peor de todas las bases posibles.

**Sr. Rodríguez (C. J.)** — Pido la palabra.

Para hacer una breve aclaración al señor diputado por Corrientes.

Lo que las respectivas cajas deben aportar a la caja de tranviarios no está en los aportes sino en las sumas que proporcionalmente corresponden en cada caso. No se trata de los aportes individuales sino de las sumas que a cada caja corresponde pagar según el tiempo de servicios prestados a las empresas o administraciones que contribuyen a su formación.

**Sr. Bermúdez.** — ¿Cómo podría aportar la caja de jubilaciones y pensiones civiles el porcentaje que establece esta ley, cuando ella no recibe de los empleados sino el cinco por ciento?

Supongamos un caso concreto: diez empleados públicos acogidos a la ley de jubilaciones civiles pasan a la caja

de jubilaciones de tranviarios, y en virtud de esta disposición del artículo, ellos, que sólo han aportado a la caja civil el cinco por ciento más los intereses capitalizados hasta la fecha, no le entregarán a la caja de tranviarios más que esa suma.

**Sr. Rodríguez (C. J.)** — Ahí está el error del señor diputado. El texto del artículo que posteriormente consideraremos no dice que se ha de contribuir con el aporte del cinco por ciento que es el que hacen los empleados nacionales: no dice eso el artículo; lo que dice es que se ha de contribuir con la suma proporcional a los años de servicio que hayan pasado en cada una de estas instituciones, de manera que no es el cinco por ciento sino las sumas aportadas. Basta leer el artículo 54 combinado con el 55.

**Sr. Bermúdez.** — ¿Y de dónde sacan esa suma?

**Sr. Rodríguez (C. J.)** — De la caja.

**Sr. Bermúdez.** — ¿Cómo va a echar mano del capital de la caja para dar una cantidad mayor de la que realmente se ha aportado?

**Sr. Rodríguez (C. J.)** — No, señor diputado; es un grave error.

## 8

## MOCION DE APLAZAMIENTO

**Sr. Sánchez Sorondo.** — Pido la palabra.

Esta discusión tan interesante demuestra la conveniencia de que este asunto sea tratado con un poco más de meditación y de información por la cámara. En cambio, está sobre la mesa de la secretaría el despacho que acaba de formular la comisión de negocios constitucionales sobre la proposición del señor diputado por San Juan.

A pesar de que se ha resuelto tratar el despacho de la comisión de negocios constitucionales después de la sanción de la ley de jubilaciones, la índole del debate y el hecho de que se trata de un despacho que ignoran los señores diputados en su casi totalidad, me hace pensar que acaso la honorable

cámara no tendría inconveniente en volver sobre su resolución anterior, hacer un paréntesis a esta discusión y tratar el despacho de la comisión de negocios constitucionales, sobre el cual entiendo que ha recaído el voto de la unanimidad de los miembros que la componen.

Hago moción en ese sentido.

—Apoyado.

**Sr. Rodeyro.** — ¿El aplazamiento para cuándo es?

**Sr. Sánchez Sorondo.** — Para cuando la cámara resuelva; podríamos continuar mañana, o en la próxima sesión. Por otra parte, yo no hago moción de aplazamiento: es una simple suspensión hasta tanto se trate el asunto de San Juan.

**Sr. Rodeyro.** — Deseo que la secretaría me informe cuántos diputados hay en la casa.

**Sr. Presidente** (Sánchez de Bustamante). — Hay ochenta y cuatro, señor diputado.

**Sr. Rodeyro.** — Como ven los señores diputados, el número de presentes en la casa es como para tener quórum con bastante dificultad; entonces lo que correspondería es mantener el quórum en la casa hasta tanto se resuelvan estos asuntos.

**Varios señores diputados.** — No, no, no.

**Sr. Rodeyro.** — No podemos dejar de seguir tratando este proyecto. Estas son medidas que tratan, en una forma parlamentaria hábil, de dar largas al asunto, que no es lo que corresponde de acuerdo con las necesidades que él consulta. Como tampoco el proyecto presentado por el señor diputado Tierney es de los que deben sufrir demoras, insisto en mi moción de que se mantenga el quórum en la casa hasta despachar estos dos asuntos. Resuelto eso, podría hacerse el paréntesis que solicita el señor diputado Sánchez Sorondo para tratar ese otro asunto, que imagino no dará lugar a gran debate.

**Sr. Bermúdez.** — Pido la palabra.

Deseo hacer otra indicación, que me parece útil y práctica.

Este asunto que se está debatiendo, relativo a la ley de jubilaciones y pensiones de los tranviarios y otros gremios, es muy importante e interesante; probablemente va a ser motivo de muchas observaciones que no están previstas: yo no voy a puntualizar porque — lo repito, — ignoro en absoluto el contexto de la ley. Entonces, haría la proposición de que la presidencia ordene de inmediato la impresión de este proyecto con el despacho de la comisión y que se reparta a todos los diputados para que, si prosperara la moción del señor diputado Sánchez Sorondo, se pudiera tratar en la primera sesión próxima, con conocimiento del asunto, porque me parece inusitado, desusado en las prácticas parlamentarias, que se esté discutiendo en esta forma un asunto de tanta entidad.

**Sr. Rodeyro.** — Insisto en que se vote mi moción de mantener el quórum en la casa, porque nos vamos a encontrar sin quórum para tomar la resolución, y esa es la forma de no hacer nada.

**Sr. Presidente** (Sánchez de Bustamante). — Hay otras mociones anteriores a la del señor diputado; se votarán por su orden.

**Sr. Méndez Casariego.** — Pido la palabra.

Desde luego, apoyo la indicación del señor diputado por Corrientes, que reproduce la mía anterior; la experiencia de dos o tres horas de sesión nos está demostrando que es inútil empeñarse en votar leyes cuando los diputados no tienen conocimiento pleno de lo que votan, o todos los elementos necesarios para formar juicio acerca de aquello sobre que deben pronunciarse. Podríamos marchar adelante un artículo o dos, y volveríamos a caer en lo mismo, a repetir las mociones, porque los diputados no pueden votar en las condiciones de ignorancia en que se les exige que voten. Repito que es en interés de la misma ley y en interés de los gremios afectados por la ley: éstos necesitan una ley que, si no perfecta, por lo menos no se preste a las complicaciones que se han apuntado.

**Sr. Rodeyro.** — Que se discuta un ar-

tículo no tiene que alarmar a nadie. Estamos aquí para discutir.

**Sr. Méndez Casariego.** — Desde luego apoyo la indicación formulada, que completa la del señor diputado Sánchez Sorondo, para que este asunto se detenga en su discusión hasta tanto esté impreso el despacho y se pueda votar a conciencia.

**Sr. Anastasi.** — Ante todo, sería conveniente votar la indicación referente al mantenimiento del quórum.

**Sr. Presidente** (Sánchez de Bustamante). — Si prospera la moción de aplazamiento no tiene razón la de mantenimiento del quórum.

**Sr. Rodeyro.** — Es que, señor presidente, he planteado respecto de cualquier asunto que se llegara a tratar, como cuestión previa, el mantenimiento del quórum, porque creo que prácticamente nos vamos a quedar sin número.

**Sr. Presidente** (Sánchez de Bustamante). — ¿El señor diputado por Buenos Aires fija término a la suspensión que solicita?

**Sr. Sánchez Sorondo.** — Yo no había fijado término; pero posteriormente el señor diputado por Corrientes, con muy buen acuerdo, hizo indicación de que se suspendiera la consideración de este asunto hasta tanto se imprima el despacho.

Acepté ese temperamento, y por lo tanto no tengo inconveniente en modificar mi moción en el sentido de que se entre a tratar inmediatamente el despacho de la comisión de negocios constitucionales y se suspenda la consideración del despacho sobre jubilación de tranviarios hasta tanto se imprima.

**Sr. Presidente** (Sánchez de Bustamante). — Se va a votar la moción de aplazamiento.

**Sr. Ferreyra.** — Pido la palabra.

Creo que la moción consiste en suspender el asunto que se está votando...

**Sr. Presidente** (Sánchez de Bustamante). — Hasta tanto se imprima el despacho.

**Sr. Ferreyra.** — Me parece que es poco serio el procedimiento de que,

avocada la cámara a la votación de un asunto, se interrumpa la consideración del mismo para intercalar uno nuevo. Esto se ha hecho en las sesiones del año pasado y creo que la cámara debe terminar con esta pésima práctica, que es la negación de todo método de trabajo. Si es que la cámara tiene realmente descos de trabajar, quizá fuese preferible votar sesión permanente hasta tanto se despachen los dos asuntos que están pendientes; pero interrumpir la consideración de un asunto para iniciar el debate de otro, sólo puede conducirnos a perder lamentablemente el tiempo.

**Sr. Rodeyro.** — Es precisamente la moción que yo he hecho.

**Sr. Presidente** (Sánchez de Bustamante). — Se va a votar la moción de aplazamiento.

—Se vota y resulta negativa.

**Sr. Presidente** (Sánchez de Bustamante). — Se va a votar la moción del señor diputado Rodeyro sobre mantenimiento del quórum hasta concluir con el estudio de los dos asuntos.

—Se vota y resulta negativa.

**Sr. Rodeyro.** — Que se rectifique la votación.

**Sr. Bermúdez.** — ¿Qué quórum se necesita para adoptar esta clase de resoluciones?

**Sr. Presidente** (Sánchez de Bustamante). — Simple mayoría.

**Sr. Bermúdez.** — Se trata de una reconsideración y voy a recordar el antecedente de que un señor diputado hizo moción en la primera sesión extraordinaria de que las horas de sesión fuesen de las 15 a 20. Siendo así y habiendo ya la cámara determinado las horas de sesión, lo que ahora se propone importa una reconsideración.

**Sr. Presidente** (Sánchez de Bustamante). — No puede haber reconsideración sino en la misma sesión: la cámara puede en cualquier momento variar su método de trabajo.

**Sr. Rodeyro.** — Modifico mi moción: que el quórum se mantenga hasta las veinte.

—Apoyada esta moción, se vota y resulta afirmativa.

**Sr. Presidente** (Sánchez de Bustamante). — Continúa la discusión del artículo 5.º

**Sr. Bermúdez.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (Sánchez de Bustamante). — La presidencia consulta a la cámara sobre si la moción aprobada autoriza el uso de la fuerza pública.

**Sr. Peña.** — Basta con la autoridad del presidente.

**Sr. Presidente** (Sánchez de Bustamante). — La presidencia necesita la votación.

**Sr. Bermúdez.** — ¿Qué necesidad hay de medios de violencia?

**Sr. Rodeyro.** — No hay ningún inconveniente—dadas las facultades que tiene la presidencia—para que sea eficaz la moción que he formulado.

—Después de unos momentos para conseguir quórum:

**Sr. González Iramain.** — Pido la palabra.

La presidencia está por someter a resolución de la cámara una cuestión que se ha votado. Acaba de resolver sesionar de manera permanente hasta las ocho de la noche, con mantenimiento del quórum; y mantenimiento del quórum, señor presidente, quiere decir cerrar las puertas de calle para que los diputados no se vayan de la casa. No es necesario, como el señor presidente lo quiere, pedir autorización a la cámara para usar de la fuerza pública. Basta que la presidencia mantenga el quórum, como se ha votado.

**Sr. Presidente** (Sánchez de Bustamante). — Es que hay diputados que entienden que la votación no importa el mantenimiento del quórum.

**Sr. de Tomaso.** — En la moción se ha propuesto el mantenimiento del quórum.

**Sr. Rodeyro.** — Mi moción ha sido en ese sentido.



¿Cómo voy a pedir una medida ilusoria? La finalidad de mi moción era mantener el quórum e iba contra los que quieren escapar al cumplimiento de sus deberes. Era una moción perfectamente clara, para poner en evidencia a los que no quieren trabajar. Hacer confusión en este asunto es complicarse con los que no quieren trabajar. (*Aplausos en la barra*).

Deseo saber si la presidencia permite, en este momento, que los diputados se ausenten del recinto. Porque si así fuera, estamos haciendo papel ridículo.

**Sr. Presidente** (Sánchez de Bustamante).—La presidencia no se cree autorizada para usar de la fuerza pública.

**Sr. Rodeyro.** — La presidencia tiene autorización para usar de la fuerza pública.

**Sr. Presidente** (Sánchez de Bustamante). — La presidencia no la tiene, de acuerdo con los precedentes que recuerda; siempre ha sido autorizada expresamente para ello.

**Sr. González Iramain.** — Pido la palabra.

Voy a votar en contra de que se autorice a la presidencia para usar de la fuerza pública, porque creo que le basta avisar por teléfono a la comisaría de la casa para que se cierren las puertas y no salgan los diputados. Con esto, me parece que es suficiente.

**Sr. Presidente** (Sánchez de Bustamante). — ¿Y qué hace la presidencia si un diputado quiere salir y pide se le abra la puerta?

**Sr. González Iramain.** — La puerta no se abre.

**Sr. Miñones.** — Cada vez que se ha hecho moción para usar de la fuerza pública, la presidencia ha cerrado las puertas y si un diputado ha querido ausentarse la presidencia ha dado cuenta a la cámara.

**Sr. Presidente** (Sánchez de Bustamante). — Está equivocado el señor diputado. La presidencia ha pedido en cada caso autorización para usar de la fuerza pública. Estos son los precedentes que conoce la presidencia.

**Sr. Rodeyro.** — Solicito de la secretaría me informe de lo siguiente: cuando hice la moción de mantener el quórum, la secretaría anunció que había 84 diputados en la casa y solicito se me diga cuántos hay en este momento.

**Sr. Secretario** (González Bonorino). — Hay 83 señores diputados.

**Sr. Rodeyro.** — Corresponde que la presidencia haga cerrar las puertas, antes de que nos quedemos sin número en la casa.

—Apoyado.

**Sr. González Iramain.** — Mientras se llama para votar, los diputados se van a ir y entonces no tendrá objeto cerrar las puertas.

**Sr. Gil.** — Pero si ya hemos votado eso.

**Sr. González Iramain.** — La presidencia no lo entiende así.

**Sr. Rodeyro.** — Solicito los nombres de los diputados que estando en la casa están fuera del recinto.

**Sr. Bermúdez.** — Pido la palabra.

Me parece que la medida propuesta por el señor diputado Rodeyro es contraproducente. Desde que la cámara inició sus sesiones extraordinarias, no se ha dejado de trabajar un solo día. Y ahora mismo hay quórum en la casa y estamos trabajando. ¿A qué viene, entonces, esta medida de violencia? Y lo que provoca el retiro de los diputados, son precisamente estas medidas de violencia, cerrar las puertas y emplear la fuerza pública. No necesitamos de ello. Tenemos tanto o mejor interés que el señor diputado en trabajar, y estamos trabajando.

**Sr. Rodeyro.** — Los que se van no demuestran que tengan ganas de trabajar. Solicito que la secretaría lea los nombres de los diputados que no están en el recinto, estando en la casa.

**Sr. Presidente** (Sánchez de Bustamante). — Se va a votar si el mantenimiento del quórum importa el uso de la fuerza pública.

—Resulta negativa.

**Sr. Rodeyro.** — Pido que se rectifique esa votación, nominalmente.

**Varios señores diputados.** — ¡No! ¡No!

**Sr. Peña.** — En esta media hora de incidencia, ya podría estar casi votada la ley.

**Sr. Rodeyro.** — Con las mociones de aplazamiento, ¡cómo va a estar votada la ley! Es muy hábil el señor diputado.

**Sr. Peña.** — No tengo ningún interés electoral; no tengo más interés que el de votar la ley. Estoy preparado para votarla, porque conozco la ley similar de los ferroviarios; pero cuando un grupo de diputados manifiesta que no sabe nada, hasta por el decoro de la cámara...

**Sr. Rodeyro.** — Tiene la obligación de saber.

**Sr. Peña.** — ...me pareció que debía apoyar su postergación. Ahora estaría hasta por hacerle esta otra... y le indico al señor diputado que la haga, ya que está tan interesado en este asunto: haga la moción de que votemos a libro cerrado y será lo mejor.

**Sr. Rodeyro.** — No, señor diputado. Es un proyecto que conoce la cámara y toda la opinión pública. (*Aplausos*).

—Los señores diputados Rodeyro y Peña hablan simultáneamente, y el señor presidente hace sonar la campana.

**Sr. Peña.** — Agradézcame esos aplausos de la barra.

**Sr. Rodeyro.** — Por lo menos, los debo por interpretarlos mejor a ellos y no al señor diputado.

—Se repiten los diálogos, y el señor presidente hace sonar nuevamente la campana del recinto.

**Sr. Rodeyro.** — Prefiero interpretarlos a ellos, y no al señor diputado.

**Sr. Peña.** — Pero no lo haga a expensas de los señores diputados.

—Suena nuevamente la campana.

9

## JUBILACION DE EMPLEADOS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

**Sr. Presidente** (Sánchez de Bustamante). — Continúa la discusión del artículo 5.º

**Sr. Bermúdez.** — Pido que se lea nuevamente el artículo.

—Se lee.

**Sr. Bermúdez.** — Pido la palabra.

Señor presidente: Vuelvo a hacer a la comisión la pregunta que no ha sido contestada en ninguna forma, sino bajo su aspecto doctrinario. Como está establecido el equilibrio financiero de esta caja, tomando en cuenta la incorporación de los obreros y empleados que no formando parte de las empresas actuales hayan prestado servicio en otras empresas o en otras reparticiones del estado, ¿de qué manera se prevé la financiación de los compromisos que esta institución o nueva caja se echa sobre sí para hacer frente a ellos?

**Sr. Moreno.** — Pido la palabra.

Aunque no tengo una preparación suficiente en estas cuestiones de finanzas, ni sobre asuntos de jubilaciones, sin embargo, guiándome por el sentido común y para mejor ilustración, buscando un símil, pareceme que la cuestión fundamental que propone el señor diputado por Corrientes, puede explicarse en la siguiente forma y concordante con el antecedente que es oportuno recordar.

Han sido presentadas iniciativas asimilando a los docentes, ya sea que hayan servido en los municipios, en las provincias o en la nación, para ser beneficiados con una sola jubilación. Cuando este pensamiento fué anunciado en público y convertido en diversos proyectos, los que contaron con el auspicio casi unánime, yo debí disipar una duda. Entonces recurrí a una explicación y se me dijo que la cuestión financiera se reducía a términos sencillos, porque yo tenía en principio las mismas prevenciones que el se-

ñor diputado. Se me ocurría que la cuestión se presentaría en términos sumamente complejos tanto más cuanto que, por ejemplo, un maestro que hubiera desempeñado servicios en las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Salta, etc., hubiese tenido que recurrir a esas diversas cajas complicando la proporcionalidad de sus aportes.

Aplicando ese criterio de sencillez, me parece que los temores del señor diputado quedan salvados, teniendo en cuenta, como lo explicó el señor miembro informante de la comisión, que el aporte de cada una de esas cajas, obligadas por la ley a contribuir, estaría en correspondencia con los servicios que ese empleado hubiera prestado en cada una de esas reparticiones, en proporción a los años de servicios y según el tanto por ciento, puesto que en mi opinión esos descuentos no son más que un seguro en cierto modo obligatorio, cuyos intereses capitales le pertenecen, algo así como un derecho adquirido.

Son estas simples palabras las que me parecen que aclaran en parte el concepto, debiendo agregar que respecto en mucho las opiniones del señor diputado por Corrientes, que ha hecho un estudio muy completo de esta materia. Era simplemente lo que quería decir para disipar en cierto modo las prevenciones del señor diputado.

**Sr. Bermúdez.** — Pido la palabra para hacer una simple observación.

Ha confundido el señor diputado mi interrogante, y la respuesta del señor miembro informante de la comisión, concordante con las expresiones que acaba de vertir el señor diputado, no resuelven la cuestión. El hecho de que tengan que hacer su aporte a la caja aquellas instituciones, en relación al tiempo de servicios que han prestado en empresas extrañas a esta nueva institución, yo no lo discuto, es claro. Concretando el caso para que se entienda bien: un empleado, un peón o un obrero municipal, después de prestar 11 años de servicios, — pongamos el caso, — pasa a acogerse a los beneficios de esta ley; él debe aportar al fondo de jubilación de esta nueva ca-

ja el tanto por ciento que esta ley establece durante 11 años sobre el sueldo que tenga. Pero no es eso lo que va a aportar, porque si esta caja establece que el aporte de esos empleados del 15 por ciento y el aporte que ellos llevaron a las otras instituciones donde sirvieron antes, no es sino del 5 o 10 por ciento, hay una diferencia de 10 o 5 por ciento, que es en perjuicio de esta institución; y ¿quién le resarce a esta caja el perjuicio ocasionado por esa diferencia?

No es en relación al tiempo, señor diputado, es en relación al capital que debe llevar cada uno al fondo de jubilación, para que tenga igual derecho a los beneficios que la ley acuerda. De modo que la cuestión no queda resuelta con decir que se va a llevar un aporte equivalente al tiempo de servicios, eso ya lo sabemos; es el quantum del aporte lo que me interesa.

Por eso entiendo que no se puede hacer una ley justa y equitativa sino cuando los beneficios que la ley acuerda está en estricta relación de igualdad y de proporcionalidad con el aporte de todos los que van a gozar de esos beneficios. No es conveniente crear hijos y entenados, como ha ocurrido, cometiéndose un error gravísimo con la ley de jubilaciones y pensiones, que al dictarse en 1905 empezó por esta monstruosidad: por reconocer a los empleados nacionales todos los servicios prestados con anterioridad, sin aporte alguno al fondo de jubilación. Es lo que yo quiero evitar.

**Sr. Rodríguez (C. J.)** — Pido la palabra.

Para contestar brevemente a las observaciones hechas por el señor diputado por Corrientes.

En la exposición anterior yo creo que he dado las razones suficientes para aclarar los fundamentos que tienen los artículos que están en discusión, pero ante la insistencia de las observaciones voy a sintetizarlos con toda claridad.

Estas observaciones puedo dividir las en tres: la una, que hizo al principio, fué la que no subvenía el mecanismo de esta ley a la financiación de los retiros y pensiones que se acordaran recípro-

camente estas cajas. He contestado que el artículo 55 prevé la situación que consulta el señor diputado. Se establece allí claramente que, en tal caso, la caja respectiva entregará a la caja jubiladora la suma proporcional que corresponda.

A diferencia de lo que dice la ley de ferroviarios en el artículo 54, donde se establece que se entregarán simplemente los aportes del personal que, de acuerdo con el pacto anterior, optasen por los beneficios de la presente ley, en el texto que se discute, en cambio, se establece que se entregarán las sumas que proporcionalmente corresponda en cada caso.

Respecto de esta cuestión creo que no tenemos ninguna dificultad ya con el señor diputado por Corrientes, y entendemos que en el caso de llegar a jubilarse ese empleado tranviario la caja tendrá que contribuir con la suma proporcional al tiempo en que haya prestado servicios en las otras empresas o administraciones.

El otro punto de que me voy a hacer cargo en este momento es el que se refiere a la injusticia que para el señor diputado representaría el hecho de que a ese empleado, que se jubila con la caja de tranviarios y empresas particulares, y habiendo contribuido a la caja nacional o de ferroviarios solamente con el cinco o el trece por ciento respectivamente, tuviera, sin embargo, esa caja que pagarle la pensión acordada por una suma superior.

Yo no veo cómo puede establecerse la igualdad que el señor diputado pretende. El propio mecanismo del seguro justifica esa diferencia. Desde el momento que yo, ingresando a una caja de retiros, tengo que pagar una cuota o una prima, es porque voy a recoger luego en la indemnización una suma mucho mayor. Mañana, cuando llega el riesgo consiguiente, yo no puedo reclamar solamente una cantidad igual a los diversos aportes que he hecho a la caja. Si eso sucede en el caso de haberse prestado los servicios integralmente durante treinta años, la misma razón hay para el caso de que se hayan prestado parcialmente durante diez

o quince años: es entendido que por aporte en cantidad inferior tenga que recibir una indemnización en cantidad superior, porque se guarda precisamente la armonía, la igualdad del mecanismo del seguro. Por esa razón no creo que importa una injusticia el jubilar o pensionar a los que habiendo contribuido a la caja nacional sólo con el cinco por ciento o el trece por ciento a la de tranviarios, deban sin embargo pagarles esas cajas, cuando llegue el caso de riesgo, una suma mayor. No se hace sino guardar el equilibrio o armonía del mecanismo de la institución del seguro.

En cuanto al argumento de que se puede hacer peligrar la financiación de la caja de tranviarios, yo hago esta afirmación, que es conocida de todos: ninguna de las cajas de retiro está actualmente en equilibrio financiero ni lo estuvo cuando se instituyó. Para estarlo, hubiera tenido que asegurarse con todo rigor el funcionamiento de sus factores matemáticos, y digo esto porque en primer término se conceden de inmediato, a los pocos años, a los tantos años, a personas que jamás contribuyeron a formar el fondo durante todo el tiempo de servicios que se requiere para jubilarse. Si el señor diputado quisiera llegar al equilibrio ideal de la caja tendría que empezar por establecer, ante todo, la obligación para todos de contribuir durante treinta años a la formación de los fondos y entonces, se demoraría su funcionamiento treinta años. Esa sería una de las bases.

También podría haber tenido otra solución: que las empresas, en vez de contribuir con el ocho, contribuyan con el diez o el quince por ciento, pues ellas son las verdaderas beneficiarias de las energías que se agotan, y las que reciben los frutos de la prosperidad financiera que las hace vivir largo tiempo.

Por eso digo que si le alarma la circunstancia de la posibilidad de la bancarrota financiera de la caja, es una posibilidad que se cumpliría dentro de 15 ó 20 años, porque se sabe que con el funcionamiento de estos factores matemático-financieros se obtiene un resultado admirable de acumulación de fon-

dos. La crisis puede llegar a los 20 ó a los 30 años, como ha sucedido con la primera institución francesa y con otras; pero para entonces y tratándose del estado, no hay en realidad peligro de que ese caso pueda producirse, desde que es el estado el que debe contribuir a salvar sus dificultades de carácter financiero, porque es el único deudor del socorro a sus empleados que le dieron toda su fuerza de trabajo.

Por otra parte, debo recordar a la cámara y a propósito de la observación hecha por el señor diputado Bunge, que los casos serán limitadísimos. Estas son precisamente las palabras que pronunciaba hace pocos momentos cuando hacía la observación.

Resumiendo, a mi juicio y en el de la comisión que ha firmado este despacho, no obstante los defectos de equilibrio financiero que pueda tener, creo que este artículo debe ser sancionado porque responde a un alto concepto de justicia; no es posible que empleados públicos o ferroviarios por circunstancias ajenas a su voluntad hayan prestado diez años de servicios en una empresa y que luego que pasen a otra empresa no reciban la retribución a que por sus largos servicios tienen derecho. Por el contrario, exigir que un empleado esté treinta años prestando servicios en una sola empresa, para merecer un retiro en su vejez, sostengo que importa establecer una esclavitud. Por eso es necesario que se consagren esos principios, que al hacer justicia, le aseguran su libertad y dignidad de hombre.

**Sr. Bermúdez.** — Pido la palabra.

El señor diputado Rodríguez está insistiendo en un concepto con el cual yo he estado de acuerdo desde un principio. He dicho que no desconozco la legitimidad de esta iniciativa, ni del concepto fundamental que contiene este artículo. Me he referido exclusivamente a la faz financiera de la cuestión, que queda ahora en mayor oscuridad que antes. Declaro ingenuamente que yo no soy muy accesible a la retórica y me gustan más las cifras, las expresiones concretas. El señor di-

putado Rodríguez, con su reconocida ilustración, es capaz de fundamentar sabiamente una doctrina, una teoría, pero llegando a la expresión matemática de las cosas, falla — y discúlpe-me la franqueza el señor diputado — falla de una manera absoluta, porque no ha dilucidado el problema económico que yo he planteado.

**Sr. Peña.** — ¿Me permite el señor diputado?... Es para contribuir a la brevedad del debate. Creo haber dado con la solución que está en el artículo que acaba de leer el señor diputado.

**Sr. Bermúdez.** — Es lo que he preguntado a la comisión desde el principio.

**Sr. Peña.** — El artículo leído dice que cada una de las cajas hará el aporte proporcional que le corresponde. Quiere decir que si se trata de una pensión de 150 pesos, el empleado recibe los cien pesos de la caja de tranviarios; pero si de la caja nacional no recibe los cien, la caja de tranviarios no tomará en cuenta los servicios que haya prestado en otra parte.

Con esta breve interrupción creo que podemos dar por terminada la cuestión.

**Sr. Bermúdez.** — Es la primera vez que se me contesta lo que yo he preguntado, porque la comisión ha guardado silencio respecto de este punto. Pido que se lea el artículo.

**Sr. Rodríguez (C. J.)** — Yo le he contestado al señor diputado y he leído el artículo, como consta en la versión taquigráfica.

**Sr. Presidente** (Sánchez de Bustamante). — Se va a leer el artículo 54.

—Se lee el artículo 54.

**Sr. Bermúdez.** — ¿Dónde está la previsión de este artículo?

**Sr. Avellaneda (N. A.)** — Está en el artículo 55.

**Sr. Bermúdez.** — Pido que se lea ese artículo.

—Se lee el artículo 55.

**Sr. Peña.** — ¿Se ha convencido el señor diputado?

**Sr. Bermúdez.** — ¿Cómo quería el señor diputado que me convenciera de lo que no conocía? Me extraña su observación. He preguntado a la comisión cómo está previsto el caso y al no contestárseme, no podía convenirme.

**Sr. Presidente** (Sánchez de Bustamante). — Se va a votar el artículo 5.º

—Se vota y es aprobado.

—En discusión el artículo 6.º.

**Sr. Rodríguez (C. J.)** — Pido la palabra.

Para informar a la honorable cámara respecto de este artículo, ya que los señores diputados no tienen el despacho a la vista.

El artículo 6.º enumera todos los recursos que constituirán el fondo de la caja.

Desde luego debo decir que la redacción y el contenido del mismo corresponden al que sancionó esta cámara con el número 19 y al número 9 de la ley de ferroviarios, con ligeras diferencias.

El inciso a) es igual al inciso 2.º de la ley ferroviaria y figura también en la sanción de esta cámara. El b) establece una modificación en la forma de pago, pero es igual a lo que se establece en la ley ferroviaria y en la nacional de jubilaciones. El inciso c) corresponde al inciso 3.º de la ley ferroviaria. El d) al 4.º de la misma ley; el e), se refiere a los recursos provenientes del artículo 51 de la ley, recursos que son los fondos que ciertas empresas hayan debido aportar para sus respectivas jubilaciones; el inciso f) corresponde al 5.º de la ley de jubilación de ferroviarios.

Respecto de los incisos g), h), i), j), y sobre todo el k), se hizo la discusión en el senado en razón de que se objetaba que en una legislación relativa a jubilaciones y pensiones de servicios de orden particular hasta cierto punto, se estuviera comprometiendo ilimitadamente la responsabilidad del estado.

El doctor Gallo contestó a esas ob-

jeciones diciendo entre otras cosas lo siguiente: “La garantía del estado la comisión la proyectó teniendo en cuenta que se trata de una jubilación de empleados de empresas particulares que prestan servicios públicos bien caracterizados, necesarios, esenciales en unos casos para la vida, en otros para la salud y en otros para la actividad comercial y hasta para la comodidad y grado de civilización que hemos alcanzado; servicios que existen en todas las ciudades modernas y cultas y que, desconocidos en otra hora, son, sin embargo, indispensables”.

Sin embargo el doctor Gallo dándose cuenta del peligro que pudiera importar el comprometer ilimitadamente la responsabilidad del estado propuso un agregado contenido precisamente en el texto de la ley. Este agregado es el que dice que se fijará el aporte del estado una vez realizado el censo que se refiere el artículo 59. En esta forma quedó eliminado todo peligro para que esa responsabilidad no pueda gravitar demasiado sobre el presupuesto.

De manera que una vez que se conozcan los antecedentes estadísticos el congreso fijará anualmente en el presupuesto las cantidades que estime convenientes.

No ofrece, pues, ninguna dificultad el artículo.

**Sr. Presidente** (Sánchez de Bustamante). — Se va a votar el artículo 6.º

—Resulta afirmativa.

**Sr. Rodeyro.** — Hago indicación de que artículo que no se observe se dé por aprobado.

—Asentimiento.

**Sr. Presidente** (Sánchez de Bustamante). — Habiendo asentimiento, así se hará.

—En discusión el artículo 7.º.

**Sr. Rodríguez (C. J.)** — Debo advertir a los señores diputados que el artículo 7.º y siguientes son iguales a

los respectivos de la ley de la jubilación de ferroviarios.

—Sin observación se aprueba el artículo en discusión, así como el 8.º y 9.º

**Sr. Echagüe.** — Pido la palabra, para hacer una indicación práctica.

En leyes de esta índole la simple lectura de los artículos hecha por la secretaría, cuando no tenemos ni siquiera un ejemplar impreso para seguir esa lectura, no puede agregar nada al conocimiento de los señores diputados que no hayan hecho un estudio previo. Propongo entonces que simplemente se lea la numeración del artículo y que si no es observado se dé por aprobado. El diputado que tenga alguna observación que hacer, cuando se nombra el artículo respectivo formulará su observación. La lectura que se hace es completamente inútil.

**Sr. Bunge.** — Justamente porque ninguno de los diputados tiene en su banca el texto de la ley, me parece imposible que se pueda hacer observación ante la simple numeración del artículo. Es elemental que se lea por lo menos el texto de los artículos.

**Sr. López Anaut.** — De lo contrario haríamos una votación a libro cerrado.

**Sr. Echagüe.** — En realidad, señor presidente, si se tuviera tan siquiera por delante el texto del proyecto para poder seguir la lectura, podrían, aún los que no hubiesen estudiado antes el proyecto, percibir algunas de las dificultades que en su aplicación podría presentar la ley; pero por la simple lectura del señor secretario es imposible que los señores diputados se den cuenta de la ley, sino en forma deficiente y para hacer sólo observaciones que la embarullen y hasta la perjudiquen. Ahora, el diputado que la ha estudiado con anterioridad, como es el caso del señor diputado Bunge y algunos otros, puede hacer las observaciones sin esperar la lectura de cada artículo.

Por eso es que he formulado mi moción, desde que las observaciones estudiadas son las únicas que merecen la atención de la cámara, porque aquí hay que hablar por música y no de oído. El

que tenga observaciones que formular, que las haga en el artículo correspondiente.

**Sr. Bunge.** — No es posible. Sería un procedimiento de lo más irregular. Siquiera por el prestigio de la ley, que conste al menos en el Diario de Sesiones que una vez han oído, los diputados que van a votar, el texto del artículo.

**Sr. Presidente** (Sánchez de Bustamante). — Habiendo oposición, se leerán todos los artículos.

—Sin observación se aprueban los artículos 10 al 30 inclusive.

—En discusión el artículo 31.

## 10

### SESION PERMANENTE

**Sr. Quiroga.** — Pido la palabra.

Va a llegar la hora de levantar esta sesión; faltan cuatro o cinco minutos. El proyecto que se está tratando es sumamente interesante, y debe terminarse con su sanción, para bien de todos los trabajadores que van a ser beneficiados con ella.

Al mismo tiempo insisto en la necesidad de que se trate esta noche misma el despacho de la comisión de negocios constitucionales sobre la situación de San Juan, a moción del señor diputado Tierney. Ruego a los señores diputados quieran acompañarme a votar la moción que hago de prorrogar esta sesión hasta dejar terminada la sanción de esta ley y el proyecto relativo a San Juan, autorizando a la presidencia a mantener el quórum. (*Muy bien! ¡Muy bien!*).

—Apoyado.

**Sr. Moreno.** — Pido la palabra.

Es un poco depresivo para la dignidad de la cámara tener que estar sancionando leyes bajo la acción continuada de la campanilla. Sin duda, el señor presidente no tiene otro recurso; pero yo quiero pedirle que apele a su alta autoridad moral suplicando a los

diputados tengan la gentileza de no retirarse del recinto hasta terminar con estos asuntos que tanto interesan.

**Sr. Presidente** (Sánchez de Bustamante). — Los empleados no hacen otra cosa que pedir a los señores diputados que entren al recinto.

**Sr. Moreno.** — Que el señor presidente lo diga públicamente, y todos hemos de contribuir al mantenimiento del quórum. Hay que tener en cuenta que hace cuatro horas que estamos sentados respondiendo a una gran expectativa pública, y entonces no es posible que unos cumplamos con nuestro deber y otros no procedan del mismo modo. Es necesario que la presidencia apele al honor y a la delicadeza de los señores diputados y a las responsabilidades que tenemos ante el país. (*Aplausos*).

**Sr. Presidente** (Sánchez de Bustamante). — Se hará como lo solicita el señor diputado.

Se va a votar la moción del señor diputado por San Juan: si se continúa la sesión permanente hasta concluir con los dos asuntos que ha mencionado, manteniéndose el quórum en la casa.

—Después de unos momentos de espera para conseguir quórum:

**Sr. Rodeyro.** — Deseo que me informe la secretaría cuántos diputados hay en la casa.

**Sr. Secretario** (González Bonorino). — Hay 83 señores diputados.

**Sr. Rodeyro.** — Sería el caso de que la presidencia invitara a los señores diputados que están fuera del recinto a pasar a él.

**Sr. Presidente** (Sánchez de Bustamante). — Así se ha hecho y continúa haciéndose.

**Sr. Davel.** — ¿Hasta que hora se iba a sesionar?

**Sr. Presidente** (Sánchez de Bustamante). — Hasta las veinte.

**Sr. Davel.** — Ya son las veinte y varios señores diputados se han retirado.

**Sr. Rodeyro.** — Solicito de la secretaría los nombres de los diputados que están en la casa y fuera del recinto.

**Sr. Presidente** (Sánchez de Bustamante). — Se va a votar la moción del señor diputado por San Juan para que se mantenga el quórum, usando al respecto la presidencia de la fuerza pública, hasta que se termine con el asunto en discusión y con el despacho de la comisión de negocios constitucionales sobre la cuestión de San Juan.

**Sr. del Valle.** — Pido que se haga constar mi voto en contra porque soy completamente adverso al despacho de la comisión de negocios constitucionales en la cuestión de San Juan.

—Se vota la moción del señor diputado por San Juan y resulta afirmativa.

—Reasume la presidencia el señor presidente de la honorable cámara, don Arturo Goyeneche.

## 11

### UBILACION DE EMPLEADOS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

**Sr. Presidente** (Goyeneche). — Continúa la consideración de la orden del día.

—Sin observación se dan por aprobados los artículos 31 a 57.

—En discusión el artículo 58.

**Sr. Bunge.** — Pido la palabra.

Este es el artículo que pone en evidencia la base antisocial del contexto de la ley, tal como ha sido sancionada por el honorable senado, porque, según este artículo, al facultarse a las empresas a aumentar sus tarifas, se hace recaer sobre el conjunto del pueblo trabajador de la capital el costo de esta caja de seguros que servirá a un grupo limitado de obreros, 20.000 o 22.000. Por este artículo deberá la totalidad de la capital pagar más caros los servicios tranviarios, dándose un carácter permanente a la ordenanza municipal que ha autorizado a las empresas a aumentar el 20 por ciento, y lo mismo suce-



derá con los servicios de gas y otros igualmente esenciales.

La sanción de este artículo explica que el senado haya sido tan avanzado— esto lo digo entre comillas — en las demás disposiciones, porque ello no costaba nada a las empresas y porque así se favorecía a las mismas «expensas del público en general para que pudieran ellas hacer lo posible por domesticar a sus obreros, manteniéndolos sujetos, sumisos y satisfechos.

Creo que será un error de la cámara sancionar este artículo, sobre todo en las condiciones actuales, de carácter temporario, en cuanto al costo de las materias primas que necesitan las empresas de servicios públicos.

No he de entrar en consideraciones extensas para fundar la objeción que formulo. Simplemente me limitaré a dejar constancia de que si se extendiera este sistema al seguro de todos los trabajadores de la república, aplicándolo en cada caso de acuerdo a las condiciones particulares de cada gremio, trataría el congreso de poner en práctica aquel refrán inglés del hombre que, queriendo hacer economía en la alimentación de su perro, intentó alimentarlo con su cola. No es posible acordar a los trabajadores el seguro social obligándoles a costearlo ellos mismos, en su integridad, con sus salarios, que están calculados por leyes económicas fatales, como indispensables para la subsistencia; y eso es lo que resulta con un sistema semejante.

Por eso terminaré con las mismas palabras con que he empezado mi exposición: esta disposición da un carácter antisocial a la ley que está considerando la honorable cámara.

**Sr. Ortíz.** — Pido la palabra.

Entiendo que la observación que ha formulado el señor diputado por la capital se funda posiblemente en una falta de información, puesto que...

**Sr. Bunge.** — No creo que las empresas de tranvías puedan aumentar nuevamente sus tarifas de acuerdo con esta ley, sino que lo que se está haciendo es pura y simplemente sancionar

por ley nacional el principio de la ordenanza municipal.

**Sr. Ortíz.** — Las empresas industriales en la república están sometidas a un régimen de libertad en cuanto a las utilidades que puedan obtener en su explotación, al que no están, indudablemente, sujetas las compañías de tranvías, electricidad, gas, etc.

En cuanto a tarifas tranviarias se refiere, es necesario tener presente que por el artículo que está a consideración de la honorable cámara la elevación de tarifas deberá ser previa anuencia de las autoridades que han otorgado la concesión. El régimen actual es el siguiente: se ha otorgado un aumento del 20 por ciento de las tarifas, temporariamente, por sólo tres años, transcurridos los cuales y después de haberse establecido exactamente la cuenta de capital de inversión, el concejo deliberante de la capital determinará si las utilidades de las compañías requieren o no el aumento sancionado; y en cuanto a las empresas de gas el nuevo contrato establece como máximo de utilidad el ocho por ciento. De manera que es lógico que si se fija este límite para la utilidad, las nuevas cargas que vienen a pesar después de haberse aprobado y otorgado las respectivas concesiones deben tomarse en cuenta a los efectos de una elevación de tarifas, que es la única entrada que tienen las empresas.

Por otra parte, no es exacto que pese exclusivamente sobre el pueblo trabajador todo este recargo que representa la concesión de estas mejoras. En el servicio tranviario, por ejemplo, se ha eliminado del aumento el servicio para obreros, lo que importa que una gran parte de la población, la más necesitada, no ha de contribuir para estas mejoras. Igual consideración podría hacerse con respecto a los servicios telefónicos, pues son muy pocos los asalariados que hacen uso de este servicio.

De manera, pues, que entiendo que el artículo 58 se ajusta perfectamente a reglas elementales de justicia, tratándose de servicios de esta naturaleza. Si más adelante, en el momento en

que se solicite esta elevación de tarifas, las condiciones de explotación varían en el sentido de disminuirse los gastos generales, de las materias primas y de los elementos con que se realizan, indiscutiblemente no han de ser siempre necesarios mayores aumentos para sufragar estos gastos. En caso de que las empresas obtengan también una utilidad mayor que la que le permite el respectivo contrato de concesión no se producirá tampoco el caso que señalaba el señor diputado Bunge.

En consecuencia, creo que este artículo puede votarse en la forma en que lo ha sancionado el honorable senado, sobre todo con el agregado que se le ha hecho, de la previa aprobación de los poderes públicos que otorguen la concesión, lo que permitirá juzgar las condiciones particulares de cada caso y las circunstancias de oportunidad que hagan justo el aumento.

**Sr. Bunge.** — Pido la palabra.

Para una breve rectificación.

El texto de este artículo es concordante con uno de la ley de jubilación de ferroviarios. Autoriza a las empresas a aumentar sus tarifas en todos los casos, sea cual fuere el monto de sus utilidades, en la proporción necesaria para satisfacer el aporte que proporcionalmente les corresponde por esta ley. Quiere decir, por lo tanto, que podrán esas empresas exigir la autorización para un aumento de tarifas, sea cual fuera el monto de sus utilidades. En cuanto a las empresas de tranvías, es cierto que la ordenanza municipal es de carácter temporario; pero justamente por eso es que esta sanción da carácter permanente al aumento de tarifas, porque es evidente que no se podrá en caso alguno aumentar las tarifas en las pequeñas fracciones de centavo que representaría el cálculo estricto de la concesión que va a corresponder a las empresas de tranvías por esta ley.

**Sr. Ortíz.** — No; porque entre las disposiciones del aumento existe con respecto a las empresas de tranvías la obligación de construir nuevas líneas, lo cual aumenta considerablemente los gastos de explotación.

**Sr. Bunge.** — No quisiera entrar a la discusión de todos esos detalles de la ordenanza, sino atenerme al asunto que estamos discutiendo. El roza, también, la cuestión de los coches de obreros, y es sabido que éstos sólo circulan en número muy limitado y a horas sólo accesibles a una pequeña parte de la población que trabaja normalmente; por lo tanto, la gran masa de la población trabajadora de esta capital sufre las consecuencias del aumento de tarifas que por esta ley tendrá carácter permanente.

**Sr. Ortíz.** — No es exacto; según las estadísticas, es mayor el número de boletos de obreros que se venden en la actualidad que antes del aumento de ellas.

**Sr. Peña.** — Como el señor diputado Bunge sólo quiere salvar su voto con respecto a este artículo y no ha propuesto nada, creo que se podría votar.

**Sr. Presidente** (Goyeneche). — ¿Qué propone el señor diputado?

**Sr. Bunge.** — El rechazo del artículo.

—Se vota el artículo 58 y se aprueba por 50 votos.

—Sin observación se aprueba el resto del proyecto.

**Sr. Presidente** (Goyeneche). — Queda sancionado el despacho de la comisión. (*Aplausos en la barra*).

## 12

### SITUACION DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN

**Sr. Presidente** (Goyeneche). — Se va a dar cuenta del despacho de la comisión de negocios constitucionales.

—Se lee:

*Honorable cámara:*

La comisión de negocios constitucionales ha tomado en consideración el proyecto de resolución presentado por los diputados Tierney y Cortínez y por las razones que dará su miembro informante se aconseja la sanción del siguiente proyecto de resolución: